

REVISTA GUINDA



EDICION 14



WWW.REVISTAGUINDA.COM



7 15 09 77 1 84 30 8 1
REVISTA GUINDA EDICIÓN 014

PLAN
MICHOACÁN
CON ESTRATEGIA
Y META

**CFE,
EL RETO A
VELOCIDAD
LUZ**

EL NUEVO ORDEN EN LA FISCALÍA

ASUME ERNESTINA GODOY COMO FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA **EL COMPROMISO DE FORTALECER UNA FISCALÍA AUTÓNOMA, CIENTÍFICA Y COORDINADA** PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN.

**SIETE AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN
EN MÉXICO**



Una flota para cada necesidad.

*Con nosotros, eliges el vehículo
ideal para cada operación.*



AVIS[®]

www.avis.com.do



WWW.GREMOL.COM
administracion@gremol.com



WWW.REVISTAGUINDA.COM
administracion@revistaguinda.com



PLATAFORMAS DIGITALES

@RevistaGuinda en
Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok,
LinkedIn, Issuu, Telegram y WhatsApp

CEO & CHAIRMAN

JOSÉ ANTONIO ANCONA RODRÍGUEZ
direccion@gremol.com

DEPARTAMENTO DE EDICIÓN

Ángel Vergara
Rubén Torres
Emile Ancona

redaccion@revistaguinda.com

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Zarife Maza Ceballos

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DIGITAL

Hakeem Reddie
Luis Morales
David Torre

DEPARTAMENTO ARTE Y DISEÑO

Tony S. Bueno
Regina Ortega

DIRECCIÓN COMERCIAL

Claudia Wade Ramos
Carmen de la O
Anaís Ibarra
comercializacion@revistaguinda.com

OFICINAS

Cancún: Av. Acanceh Manzana 2 Lote 3B
Supermanzana 11, Benito Juárez,
Cancún, Quintana Roo CP 77504

Tabasco: Calle A. Rullán Ferrer Núm. 630
Col. Mayito, Centro, Villahermosa,
Tabasco CP 86098

CDMX: BLVD: Manuel Ávila Camacho 88
Lomas de Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo Ciudad de
México, CDMX CP 11000

CONTACTO

administracion@revistaguinda.com

EDITORIAL

ENERO 2026
WWW.REVISTAGUINDA.COM

03



SIETE AÑOS DE TRANSFORMACIÓN

Después de la ruptura electoral de 2018, México ha transitado de un ciclo de demolición política a una etapa de consolidación institucional. Al cumplirse los primeros siete años de la denominada Cuarta Transformación —seis bajo el liderazgo fundacional de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo—, es posible realizar un balance que trascienda la coyuntura para observar las profundidades estructurales del cambio. No asistimos meramente a una alternancia administrativa, sino a la ratificación de un cambio de régimen que ha desplazado el eje gravitacional de la política: el Estado ha recuperado su rectoría económica y ha separado, con fricciones pero con eficacia, el poder político del poder económico.

El Humanismo Mexicano ha probado ser más que una retórica política. Su principio rector—"por el bien de todos, primero los pobres"— se tradujo en hechos verificables, como la reducción sustancial de la pobreza —del 45% al 29%— y en la inédita recuperación del salario mínimo, demostrando que la prosperidad compartida es un dinamizador del mercado interno y no una dádiva a fondo perdido. Si el primer sexenio funcionó como un ariete político necesario para romper la inercia del periodo neoliberal, la etapa actual, bajo la conducción de Claudia Sheinbaum, perfila una evolución donde la eficiencia administrativa busca emparejarse con la justicia social para construir el "segundo piso" de la transformación.

El inicio de este nuevo año y la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 confirman las prioridades de esta fase de consolidación. El "sello Sheinbaum" se manifiesta en una apuesta presupuestal histórica por la

infraestructura ferroviaria y la expansión de la red de protección social, destacando el reconocimiento al trabajo de cuidados mediante las nuevas pensiones para mujeres.

La 4T heredó una serie de desafíos hercúleos: la pacificación del país; la universalización efectiva del sistema de salud a través del IMSS-Bienestar; y la sostenibilidad fiscal ante un déficit que exige una cirugía financiera de alta precisión para no comprometer la estabilidad macroeconómica.

La realidad nacional de 2026 nos presenta un escenario de continuidad con cambio. El "Plan México" y la reorientación del gasto hacia proyectos estratégicos y bienestar directo evidencian una hoja de ruta clara para aprovechar la relocalización de cadenas de suministro bajo una lógica de soberanía nacional. No obstante, la concentración de recursos y los ajustes a los órganos autónomos plantean debates necesarios sobre el equilibrio institucional que una democracia madura debe procesar. La transformación es innegable, pero su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad del Estado para cerrar las brechas de seguridad y servicios públicos que aún laceran a diversas regiones del territorio.

Al iniciar un nuevo año de labor periodística, reiteramos nuestro compromiso de mirar al país de frente y con rigor crítico. Ante los retos que 2026 plantea, extendemos a nuestras lectoras y lectores un deseo de prosperidad y participación activa, con la convicción de que el análisis informado es, en sí mismo, una herramienta indispensable para la construcción de la ciudadanía y el futuro de la nación.

José Antonio Ancona Rodríguez
CEO & CHAIRMAN
REVISTA GUINDA

ÍNDICE

SIETE AÑOS DE LA TRANSFORMACIÓN

04

EL RELEVO QUE REORDENA LA FGR

23

CFE, EL RETO A VELOCIDAD LUZ

30

NEARSHORING EN PAUSA

42

EL GIRO POLÍTICO EN CHILE

56

EL NUEVO TABLERO POLÍTICO URBANO DE ESTADOS UNIDOS

61

REVISTA GUINDA, edición mensual correspondiente a enero / febrero de 2026. Director General y Editor Responsable de la Publicación: José Antonio Ancona Rodríguez. Con número de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título 04-2024-120911563300-102 que expide el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud del Título y Contenido 17711. Con domicilio de la publicación en Monte Everest M70 Lt 19 edificio C Int. 401 col. Bonfil C.P.77560 Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, Méx. Impresa por Imprenta FCV Soluciones Gráficas. Imprenta con domicilio en Av. El Rosario 751 Col. San Martín Xochinahuc, CP. 02120 Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. Nombre del distribuidor: Jesús Antonio Gallegos Pérez Domicilio: Av El Rosario 751 Col. San Martín Xochinahuc, Cp. 02120 Del. Azcapotzalco, Ciudad de México. El título de la revista, así como el contenido se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Revistas y Publicaciones Ilustradas y la Secretaría de Gobernación. Asimismo, el nombre se encuentra protegido y registrado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaría de Cultura. De esta edición fueron impresos 25,000 ejemplares.

SIETE AÑOS DE LA TRANSFORMACIÓN

PODER, CONTINUIDAD Y DISPUTA DEL RELATO DESDE EL ZÓCALO

El 6 de diciembre, el Zócalo empezó a llenarse antes de que terminara la mañana. Militantes de Morena, simpatizantes del proyecto y ciudadanos convocados por una lógica ya conocida de participación política llegaron en bloques, con banderas dobladas bajo el brazo, con gorras y con mantas que ya habían visto otras concentraciones. Algunos sabían exactamente a qué iban; otros acudían por la certeza de que la plaza vuelve a ser un espacio central cuando el poder se expresa. Desde el templo, la escena era familiar: la explanada convertida en respaldo y la multitud como argumento. Al frente, Claudia Sheinbaum hablaba desde un presente que todavía no termina de asentarse, pero que ya exige continuidad.

No era un acto de despedida ni una celebración nostálgica. Era otra cosa. Un intento por fijar el sentido de lo ocurrido antes de que el tiempo lo vuelva incómodo. Siete años después del inicio de la llamada Cuarta

Transformación, el poder volvió al lugar donde aprendió a narrarse a sí mismo. La plaza no estaba ahí para recordar el origen, sino para ordenar el futuro.

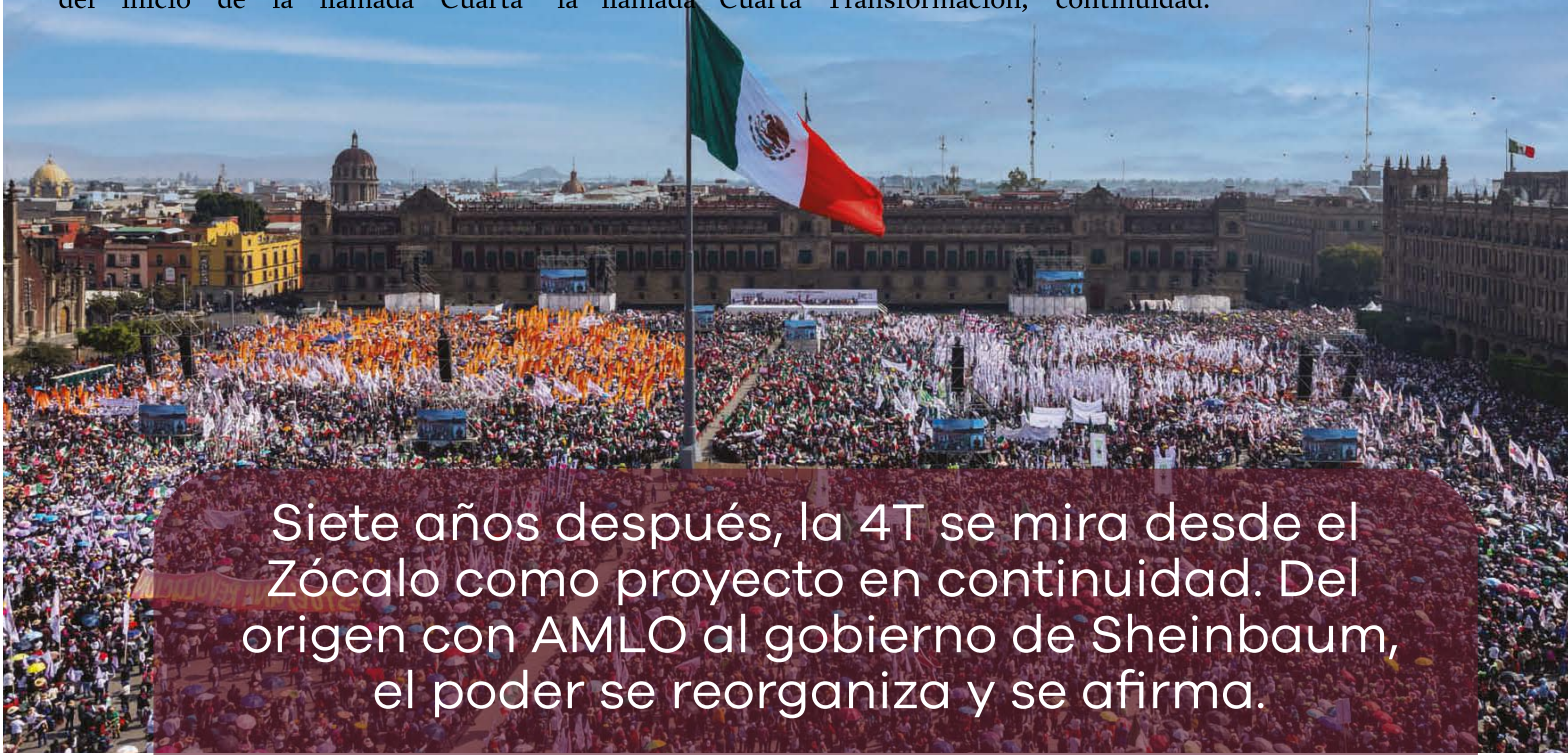
Nada de lo que ocurría en el Zócalo podía entenderse sin la figura que convirtió la ruptura en método y la persistencia en estrategia. Andrés Manuel López Obrador no estaba en el centro de la escena, pero su lenguaje, sus categorías y su forma de leer el conflicto seguían marcando el pulso del acto. El movimiento que nació contra el régimen hablaba ahora como poder que aprendió a durar.

Mientras el discurso avanzaba, la plaza sostenía algo más que consignas. Sostenía la pregunta: ¿qué se conserva cuando la transformación se vuelve costumbre, y qué se pierde cuando el relato empieza a gobernar junto con las decisiones? La plaza no era cierre, era presión.

Siete años después del arranque de la llamada Cuarta Transformación,

México vuelve a mirarse en el espejo del Zócalo capitalino. No como ritual conmemorativo ni como balance técnico de gestión, sino como un ejercicio de poder diseñado para fijar sentido en un momento de transición política, presiones externas persistentes y reacomodos internos todavía en curso. La convocatoria encabezada por Claudia Sheinbaum no ocurrió en el vacío, sino que se inscribió en una región latinoamericana que alterna entre proyectos progresistas institucionalizados y regresos conservadores, y en una economía mexicana que combina estabilidad macro con grietas territoriales, sociales e institucionales difíciles de ocultar.

Entender qué se celebra, quién convoca y desde dónde se narra hoy la 4T resulta estratégico no para repetir una consigna, sino para leer cómo el poder intenta organizar su propia continuidad.



Siete años después, la 4T se mira desde el Zócalo como proyecto en continuidad. Del origen con AMLO al gobierno de Sheinbaum, el poder se reorganiza y se afirma.

EL ZÓCALO COMO ESCENARIO DE PODER

Desde hace décadas, el Zócalo de la Ciudad de México funciona como escenario de legitimación política. No es una plaza neutral ni un espacio puramente ciudadano: es el lugar donde los gobiernos exhiben fuerza, miden capacidad de movilización y buscan ordenar el relato de su tiempo. Ahí se han celebrado victorias electorales, se han intentado cerrar crisis y se han escenificado transiciones que no siempre estaban resueltas fuera del templete.

La celebración de los siete años de la Transformación recupera ese espacio no como homenaje retrospectivo, sino como declaración de vigencia. El mensaje es claro: el proyecto no se clausura, se normaliza. No se presenta como episodio histórico terminado, sino como proceso aún en marcha. Ese matiz no es menor. Desplaza la discusión del balance hacia la disputa por el sentido.

La plaza llena, más allá de cifras exactas, cumple su función simbólica habitual. Muestra que el poder no se ejerce solo desde las instituciones, sino que conserva la calle como extensión política. El Zócalo vuelve a operar como certificación visual de gobernabilidad.

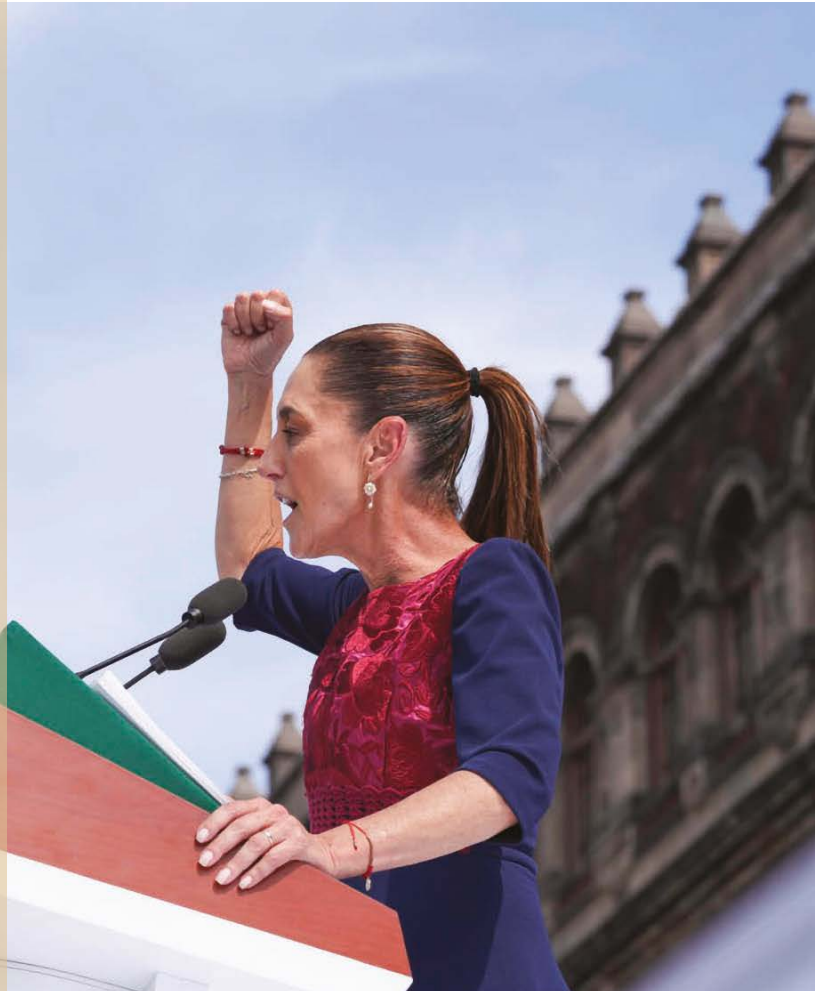
Pero la escena también revela algo más: la necesidad de reafirmación. Cuando un proyecto convoca para recordarse a sí mismo que sigue siendo mayoría, no celebra únicamente lo logrado; intenta fijar el marco desde el cual se leerá lo que viene. Nada de esto comenzó aquí.

CONTINUIDAD CON MANDO PROPIO

Es en ese marco donde se entiende la figura de Claudia Sheinbaum. Su desafío no es romper con el origen ni someterse a él, sino administrar una herencia pesada sin perder control del presente. El evento de los siete años funciona como acto de apropiación simbólica: Sheinbaum se coloca dentro del balance, no como nota al pie, sino como continuidad con autoridad propia.

No se presenta como figura secundaria ni como ruptura generacional. Se ubica en un punto intermedio cuidadosamente calculado. La Transformación ya no depende de una sola figura histórica, pero tampoco reniega de ella. Ese equilibrio es clave para la estabilidad interna de Morena y para la lectura externa del nuevo sexenio.

El mensaje es tranquilizador para mercados y gobiernos extranjeros: no hay salto al vacío. Tampoco hay improvisación discursiva. Hay administración de la continuidad. Nada de esta escena puede leerse sin el origen político que la hizo posible.





La Cuarta Transformación no nació como un proyecto de gobierno, sino como una ruptura. Antes de convertirse en sigla, en programa o en narrativa institucional, fue una acumulación de derrotas políticas, expulsiones partidistas y una persistencia que incomodó durante más de una década al sistema político mexicano.

Andrés Manuel López Obrador no llegó al poder desde la conciliación, sino desde el desgaste. Su figura se fue construyendo al margen de consensos, atravesando conflictos poselectorales, rupturas internas y una relación tensa, cuando no abiertamente hostil, con élites políticas, económicas y mediáticas. Ese origen explica el ADN del proyecto. La Transformación no se diseñó para agradar al centro político, sino para desbordarlo.

El punto de quiebre no fue 2018. Fue la insistencia en disputar el sentido de la democracia cuando las reglas parecían cerradas. El plantón de 2006, la narrativa del fraude, la construcción territorial paciente en años de derrota; todo eso fue leído durante mucho tiempo como obstinación. Hoy se relee como estrategia. López Obrador no encabezó un movimiento colegiado ni horizontal. Construyó un liderazgo personal que funcionó como eje organizador de voluntades dispersas. Morena no nació como partido clásico, sino como extensión de una figura política que ya tenía base social antes de tener estructura formal. Eso explica la dificultad para separar proyecto y persona, y la centralización de decisiones como rasgo, no como anomalía.

La política, en el obradorismo, se tradujo



a términos morales. Pueblo contra élite. Honestidad contra corrupción. Austeridad contra privilegio. Ese marco binario fue criticado como simplificación, y lo fue. Pero también resultó eficaz para ordenar el debate público en un país cansado de tecnicismos que no resolvían nada.

En economía, el sexenio rompió expectativas. No hubo desorden fiscal ni explosión de deuda. La disciplina presupuestal se sostuvo incluso durante la pandemia. Eso descolocó tanto a críticos como a aliados ideológicos. Pero esa estabilidad tuvo costos: inversión pública concentrada en proyectos emblemáticos, austeridad convertida en identidad, debilitamiento

operativo en áreas completas del Estado. La promesa de recuperar al Estado chocó con una realidad más ambigua. En salud, ciencia, cultura y órganos reguladores, la reconfiguración fue más destructiva que reconstructiva. El Estado volvió al centro del discurso, pero no siempre con mejores herramientas.

Cuando López Obrador dejó formalmente la presidencia, no dejó un vacío. Dejó un molde: un lenguaje político, una base social movilizada y una narrativa que sigue organizando lealtades. Eso es activo y problema al mismo tiempo. La Transformación nació personalista. Hoy intenta sobrevivir institucionalizada.



DE MOVIMIENTO A RÉGIMEN

CUANDO LA TRANSFORMACIÓN APRENDE A DURAR



Toda fuerza política que llega al poder con vocación de ruptura enfrenta una prueba que no aparece en los discursos iniciales: la del tiempo. Gobernar un año exige energía; gobernar siete exige método; gobernar más de una década exige algo distinto. No convicción, no épica, sino capacidad para volverse normal sin desmoronarse.

La Cuarta Transformación atraviesa hoy ese umbral. Ya no opera solo como movimiento que denuncia al pasado, sino como estructura que administra presente y futuro. Ese tránsito es incómodo porque obliga a abandonar la comodidad de la oposición moral sin renunciar del todo a ella. La narrativa insiste en el cambio permanente, pero la práctica empieza a parecerse a la de cualquier poder que aprendió a durar. Aquí se produce una mutación silenciosa. El lenguaje sigue hablando de transformación, pero las decisiones responden cada vez más a la lógica de preservación. El enemigo deja de ser únicamente el viejo régimen y comienza a ser, también, cualquier elemento que amenace la cohesión interna. La disidencia ya no es solo desacuerdo; se vuelve riesgo.

No es un fenómeno exclusivo de México. Ocurre cuando los movimientos que nacen para romper el tablero descubren que el tablero también sirve para sostenerse. El problema no es la

institucionalización en sí, sino la forma en que se hace: si fortalece reglas o si las sustituye por lealtades.

En este punto, la Cuarta Transformación empieza a mostrar los rasgos de un régimen en construcción. No en el sentido clásico de autoritarismo cerrado, sino como sistema político con narrativa propia, reglas implícitas y una frontera cada vez más difusa entre gobierno, partido y proyecto histórico. El poder deja de justificarse únicamente por el mandato popular y empieza a apoyarse cada vez más en la idea de continuidad. La pregunta incómoda empieza a asomarse, no es si este tránsito era inevitable, sino qué se va erosionando en el proceso.

Uno de los rasgos más visibles de esta etapa es la reducción del conflicto

interno visible. No porque haya desaparecido, sino porque se procesa fuera del espacio público. La disciplina se impone como virtud política. La unidad se vuelve argumento suficiente para desactivar debates. La cohesión se presenta como requisito de gobernabilidad.

Aquí algo empieza a crujir. Porque los movimientos que nacen de la pluralidad social suelen debilitarse cuando confunden unidad con silencio. La Cuarta Transformación prometió democratizar el poder; en esta etapa, tiende a administrarlo con una lógica cada vez más vertical. No como traición abierta, sino como adaptación funcional.



El papel de Movimiento Regeneración Nacional en este proceso es central. Morena dejó de ser vehículo electoral para convertirse en partido-gobierno, con todo lo que eso implica: control de candidaturas, alineación legislativa, disciplina territorial. Su fortaleza es real. Su fragilidad también. La ausencia de corrientes visibles no siempre significa consenso; a veces indica que el costo de disentir se volvió demasiado alto.

Este es el punto donde el paralelismo histórico comienza a incomodar, incluso a quienes lo rechazan. No porque la 4T replique mecánicamente al viejo sistema hegemónico, sino porque comparte una tentación común: confundir estabilidad con legitimidad automática. La permanencia en el poder empieza a leerse como confirmación moral, no como responsabilidad ampliada.

El discurso insiste en que el pueblo respalda el proyecto. Y es cierto, en términos electorales. Pero el respaldo popular no sustituye la necesidad de contrapesos internos ni de correcciones públicas. Un régimen que se explica solo desde la lealtad corre el riesgo de volverse opaco incluso para sus propios seguidores.

La transformación, en esta etapa, ya no se juega en la promesa de cambio, sino en la administración de su herencia. Y administrar una herencia implica decidir qué se conserva, qué se corrige y qué se oculta. El problema es que el relato oficial no admite fácilmente la corrección. Reconocer errores amenaza la épica. Y sin épica, el régimen pierde parte de su pegamento simbólico.

Por eso la insistencia en los aniversarios, las plazas llenas y los balances controlados. No como celebración inocente, sino como mecanismo de reafirmación. El poder se recuerda a sí mismo que sigue siendo poder.

En esa lógica, la Cuarta Transformación entra en una zona intermedia. Ya no se define solo por la ruptura con el pasado, pero tampoco puede desprenderse de este sin perder cohesión. El cambio convive con la rutina y la necesidad de durar empieza a moldear decisiones que antes se justificaban desde la épica.

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA TRANSFORMACIÓN: CONTENCIÓN, SOBERANÍA Y CÁLCULO

La economía fue, desde el inicio, uno de los terrenos donde más se apostó a la ruptura discursiva y más se practicó la cautela real. La Cuarta Transformación llegó al poder con un mensaje que inquietó a los mercados, pero gobernó con una prudencia que descolocó incluso a parte de su base ideológica. No hubo giro abrupto, no hubo expropiaciones, no hubo expansión fiscal desbordada. Hubo control. Y ese control no fue neutral: fue una forma específica de ejercer poder.





La disciplina presupuestal se convirtió en principio rector. No como recomendación técnica, sino como declaración política. La austeridad dejó de ser instrumento coyuntural y se transformó en identidad del régimen. Reducir gasto, desconfiar de intermediarios, concentrar decisiones: todo formó parte de una misma lógica. El Estado no debía crecer en tamaño, sino en control.

Ese enfoque permitió sostener estabilidad macro incluso en escenarios adversos. Durante la pandemia, México evitó los paquetes masivos de estímulo que adoptaron otras economías de la región. El resultado fue una recuperación más lenta, pero sin desequilibrios fiscales severos. Para organismos internacionales y calificadoras, el mensaje fue claro: el país no se saldría del guion macroeconómico tradicional, aunque lo criticara en discurso.

PERO LA ESTABILIDAD NO ES SINÓNIMO DE TRANSFORMACIÓN.

El crecimiento económico promedio del sexenio se mantuvo bajo. La informalidad siguió siendo rasgo estructural. La productividad no dio el salto prometido. La economía resistió, pero no se reconfiguró. La Cuarta Transformación administró el modelo heredado más de lo que lo sustituyó.

Aquí aparece una contradicción central: un proyecto que desconfía del mercado, pero depende de su funcionamiento para sostener ingresos, empleo y estabilidad. La relación con la inversión privada fue pragmática, a ratos tensa, nunca plenamente cooperativa. No hubo una política industrial articulada que ordenara incentivos, sectores estratégicos y encadenamientos productivos. Hubo decisiones fragmentadas, muchas veces subordinadas al calendario político.

El fenómeno del nearshoring ilustra bien ese límite. México capturó oportunidades derivadas de la reconfiguración global de cadenas de suministro, pero lo hizo más por geografía y tratados existentes que por una

estrategia deliberada. El Estado acompañó el

proceso, pero no lo dirigió. La relocalización avanzó sin una narrativa propia que la integrara al proyecto de transformación. En el terreno energético, la economía política fue más explícita. La defensa de la soberanía se tradujo en respaldo político y presupuestal a empresas estatales como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. El objetivo era claro: recuperar control del sector estratégico y limitar la participación privada.

El costo también lo fue. Pemex siguió operando como ancla fiscal, absorbiendo recursos públicos para sostener su viabilidad financiera sin resolver de fondo sus problemas estructurales. La apuesta por refinación priorizó soberanía narrativa sobre rentabilidad económica. En electricidad, la defensa del monopolio estatal generó fricciones con socios comerciales y tensiones regulatorias.



La relación con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá condensó esa ambigüedad. México defendió el acuerdo como pilar de estabilidad, pero tensó sus márgenes con decisiones que desafiaron compromisos asumidos. El mensaje hacia Estados Unidos fue doble: cooperación estratégica sin renuncia discursiva a la soberanía. Ese equilibrio inestable funcionó hasta ahora porque el contexto internacional fue relativamente favorable y porque la credibilidad macro no se erosionó. Pero el margen es estrecho. La economía de la transformación depende menos de su relato que de condiciones externas que no controla.

La austeridad, además, tuvo efectos internos difíciles de ignorar. La reducción de gasto operativo debilitó capacidades estatales en áreas clave: regulación, supervisión, planeación. El Estado recuperó centralidad política, pero perdió densidad técnica en varios frentes. Gobernar con menos no siempre significa gobernar mejor.

En este punto, la economía revela

el núcleo del proyecto: no una alternativa sistémica al modelo previo, sino una forma distinta de administrarlo, con mayor control político y menor confianza en los contrapesos técnicos. La transformación económica no fue ruptura ni continuidad pura. Fue contención.

Y esa contención tiene fecha de caducidad. Un régimen puede sostener estabilidad sin crecimiento durante un tiempo. No indefinidamente. La pregunta que empieza a emerger —aunque el discurso la evite— es cuánto puede durar una economía política que apuesta a la resistencia más que a la expansión, y qué ocurre cuando el margen se reduce.

MORENA POR DENTRO: DISCIPLINA, TERRITORIO Y EL PRECIO DE LA UNIDAD

Si la Cuarta Transformación avanza hacia una lógica de régimen, Morena es su engranaje central. Ya no como movimiento electoral ni como coalición de causas, sino como partido-gobierno con control

territorial, disciplina interna y una frontera cada vez más tenue entre estructura partidista y aparato estatal.

Movimiento Regeneración Nacional no se parece a los partidos tradicionales que prometió superar, pero tampoco es la anomalía horizontal que proclamó en su origen. Se ha convertido en una maquinaria eficaz de poder, capaz de ganar elecciones, sostener mayorías legislativas y operar en territorio con una mezcla de convicción ideológica, pragmatismo local y administración de lealtades.

Esa eficacia tiene una condición: la reducción del conflicto visible.

Las disputas internas no han desaparecido. Se han desplazado. Se procesan en negociaciones cerradas, en repartos de candidaturas, en alineamientos forzados. La deliberación pública se volvió excepción. La disidencia, una anomalía que se castiga con marginación política. La unidad se presenta como virtud suprema, incluso cuando implica silencio.



Aquí aparece una paradoja incómoda. Morena creció denunciando las prácticas del viejo sistema, pero en su consolidación reproduce algunas de sus lógicas más funcionales: control vertical, disciplina férrea, premios y castigos. No por nostalgia autoritaria, sino por necesidad operativa. Gobernar un país diverso exige orden. El problema surge cuando el orden sustituye al debate.

La fortaleza territorial del partido es innegable. Gobernadores, alcaldes, congresos locales y estructuras sociales forman una red que sostiene al proyecto más allá de la figura presidencial. Pero esa misma red genera inercias difíciles de corregir. El poder local aprende rápido. Y no siempre en clave transformadora.

La ausencia de corrientes internas visibles no significa consenso ideológico. Significa que el costo de expresar diferencias se volvió demasiado alto. Morena no estalla porque no discute. Y no discute porque hoy es el poder.

Ese modelo funciona mientras el liderazgo central conserve legitimidad y capacidad de arbitraje. Pero deja una pregunta abierta: ¿qué ocurre cuando el conflicto ya no puede ocultarse bajo la consigna de unidad? ¿Qué tan elástica es una estructura construida para obedecer más que para deliberar?



POLÍTICA SOCIAL Y SALUD: EL COSTO QUE NO CABE EN EL DISCURSO

El corazón social de la Cuarta Transformación se sostuvo sobre una idea simple: entregar recursos directamente a quienes históricamente quedaron fuera. Sin intermediarios, sin filtros burocráticos, sin condicionamientos visibles. Ese diseño cambió la relación entre Estado y beneficiarios.

También reconfiguró la base política del proyecto.

Las transferencias directas funcionaron como amortiguador social en un país con desigualdad persistente. Millones de personas recibieron apoyos que marcaron diferencia en su ingreso inmediato. Ese efecto no es menor ni simbólico. Es material.

PERO EL ALIVIO NO CONSTRUYE SISTEMAS.

La política social de la transformación privilegió el ingreso sobre la provisión de servicios. El Estado transfirió recursos, pero debilitó capacidades institucionales en áreas clave. Educación, salud y cuidado quedaron atrapados entre el discurso de justicia social y una ejecución fragmentada.

El caso del sistema de salud es ilustrativo. La desaparición del Seguro Popular y la transición fallida hacia nuevos esquemas dejaron vacíos operativos que no se resolvieron con narrativa. El desabasto, la precarización laboral y la improvisación cotidiana se volvieron experiencia común en clínicas y hospitales públicos.



Aquí se instala uno de los silencios más pesados del proyecto. El discurso insiste en que los problemas son herencia. El tiempo muestra que no basta con señalar el pasado cuando el presente no corrige.

La pandemia expuso esas fragilidades sin contemplaciones. El sistema resistió, pero al costo de personal exhausto, cobertura desigual y una normalización de la escasez. La transformación social se sostuvo más por transferencias monetarias que por fortalecimiento institucional.

Ese diseño tiene consecuencias políticas. Los apoyos generan lealtad inmediata. Los servicios generan expectativas de largo plazo. Apostar casi exclusivamente por lo primero asegura respaldo electoral, pero posterga la construcción de ciudadanía exigente.

La política social de la Cuarta Transformación alivió, pero aún queda camino para la transformación. Y ese límite empieza a sentirse cuando las demandas ya no son solo por ingreso, sino por calidad de vida. América Latina como espejo incómodo

México no transita este proceso en aislamiento. La Cuarta Transformación forma parte de un ciclo más amplio de gobiernos progresistas latinoamericanos que llegaron al poder con promesas de cambio estructural y enfrentaron límites similares: economías abiertas, dependencia externa, instituciones frágiles y sociedades polarizadas.

La comparación no favorece ni condena automáticamente. Simplemente incomoda.

En Brasil, el regreso de la

izquierda implicó reconstrucción institucional tras un periodo de ruptura. En Chile, el intento de refundación chocó con límites sociales y constitucionales. En Argentina, la épica redistributiva convivió con crisis macro persistente. En Colombia, el cambio político enfrenta resistencias estructurales profundas.

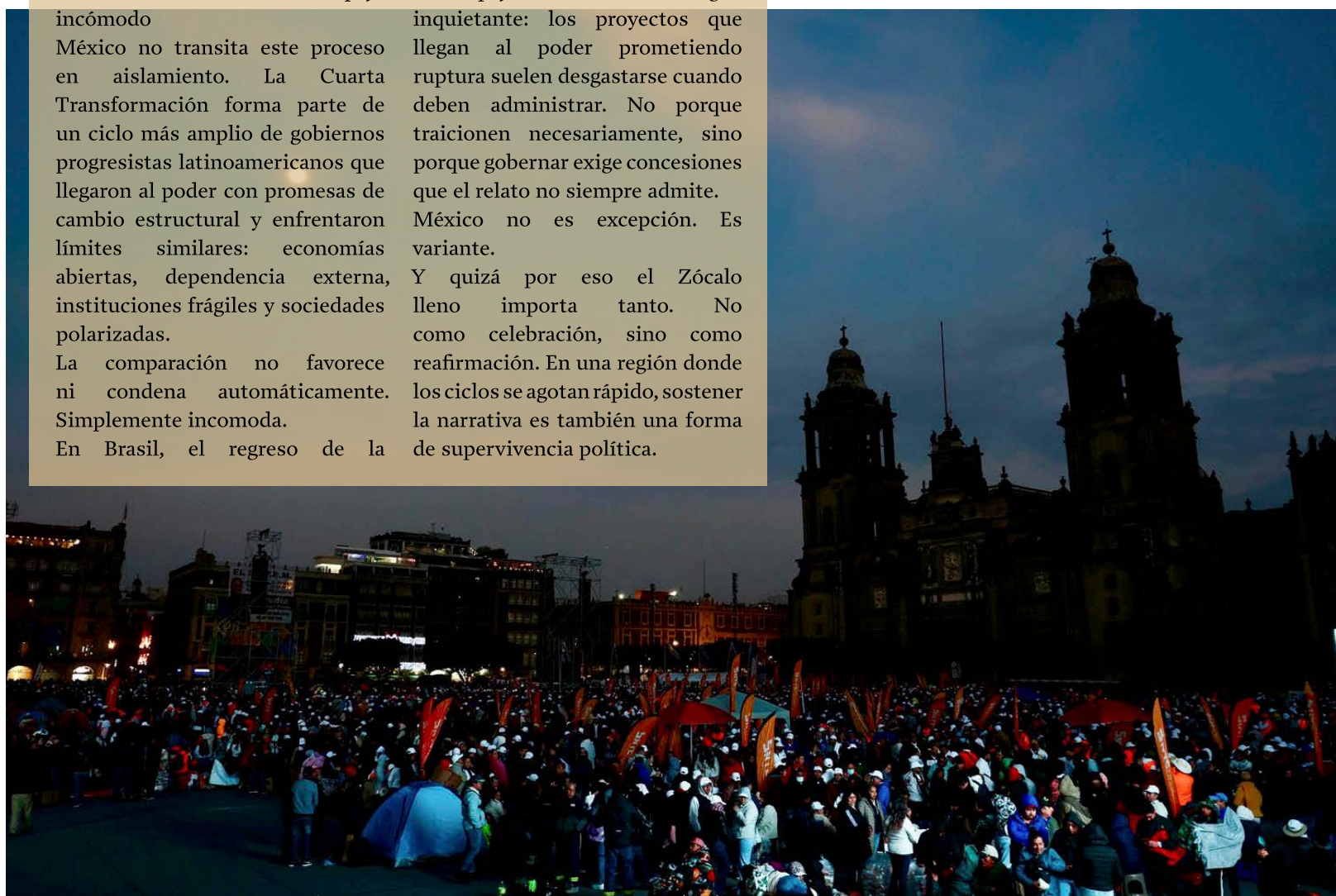
México eligió una ruta distinta: menos confrontación abierta, más control discursivo; menos ruptura económica, más contención. No lideró una agenda regional, pero tampoco se subordinó completamente. Observó más de lo que empujó.

Esa posición tiene ventajas. Evitó sobresaltos. Conservó estabilidad. Pero también dejó al país sin un proyecto latinoamericano claro. La política exterior recuperó voz simbólica, pero no construyó liderazgo regional sostenido.

La Cuarta Transformación dialoga con América Latina como espejo, no como horizonte. Se mira para confirmar que pudo haber sido peor. Rara vez para preguntarse si pudo haber sido distinto.

Ese espejo devuelve una imagen inquietante: los proyectos que llegan al poder prometiendo ruptura suelen desgastarse cuando deben administrar. No porque traicionen necesariamente, sino porque gobernar exige concesiones que el relato no siempre admite. México no es excepción. Es variante.

Y quizá por eso el Zócalo lleno importa tanto. No como celebración, sino como reafirmación. En una región donde los ciclos se agotan rápido, sostener la narrativa es también una forma de supervivencia política.



**Extorsión al campo,
violencia política
y una estrategia
federal que busca
corregir casi dos
décadas de errores.**

PLAN MICHOACÁN

CON ESTRATEGIA Y META

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia nace como respuesta a una doble fractura: la ofensiva criminal contra los productores agrícolas y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que obliga al gobierno federal a aceptar que Michoacán es, otra vez, un estado con desafíos en seguridad, pero también el terreno donde la 4T busca demostrar que puede corregir errores de los últimos 19 años. Incluso con más de diez mil elementos federales desplegados, el cochebomba de Coahuayana recuerda que el territorio sigue siendo amplio y complejo, aunque ahora existe una estrategia que combina fuerza del Estado, inversión social y una voluntad política explícita de no abandonar a Michoacán a su suerte.

DE LOS LÍDERES AGRÍCOLAS A LA CONSPIRACIÓN CONTRA MANZO

Durante dos décadas, Michoacán ha vivido una guerra de desgaste que comenzó con la disputa por el “oro verde” y terminó por normalizar el riesgo de muerte para quienes se atreven a representar a sus comunidades. La extorsión al limón, al aguacate, al ganado y a las cadenas de valor locales fue el primer aviso de que el territorio se fragmentaba en manos de consorcios criminales capaces de imponer precios, cuotas y silencios, mientras las autoridades federales anteriores respondían sobre

todo con despliegues militares sin un componente profundo que garantizara el bienestar.

La presión criminal, el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero que se convirtió en una de las pocas voces visibles contra la extorsión, refleja cómo el crimen organizado fue silenciando referentes comunitarios clave. Su muerte en un camino rural de Tierra Caliente envía un mensaje al resto del tejido productivo: quien rompa el pacto del miedo puede quedar aislado, sin un Estado suficientemente articulado para protegerlo. Justamente frente a ese vacío, Morena y sus aliados han intentado colocar la idea de que el Estado debe dejar de ser solo fuerza y convertirse en acompañamiento

permanente a los sectores productivos, aunque la implementación sea lenta y esté llena de contradicciones.

La noche del 1 de noviembre de 2025, el asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo, en plena plaza de Uruapan durante el Festival de Velas, cierra un ciclo de avisos y lo convierte en un punto de quiebre. Las investigaciones han reconstruido una conspiración que involucra al menos a un autor intelectual, operadores del CJNG y un entorno de vulnerabilidad institucional: se aprovechó un evento masivo, pese a la presencia de escoltas, para atacar a un alcalde que había denunciado prácticas de extorsión y que mantenía roces con grupos que intentaban controlar la política local.



El propio Omar García Harfuch ha señalado que los agresores estudiaron los patrones de protección del edil y eligieron el momento en que estaba más expuesto, lo que reveló fallas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La conspiración no se limitó a la ejecución: posteriormente, la detención de siete escoltas, el traslado del presunto autor intelectual a un penal federal y las versiones sobre filtraciones de información exhibieron que el crimen buscó no solo matar a Manzo, sino desnudar la fragilidad de los dispositivos de seguridad locales. Para el gobierno federal y para Morena, el mensaje fue contundente: la simple coordinación burocrática no basta, se requiere una reforma más de fondo en cómo se protegen a autoridades y liderazgos comunitarios en territorios disputados.



MOVIMIENTO DEL SOMBRERO; APOYO, DESENCUENTRO Y RUPTURA PARCIAL

Tras el asesinato de Manzo, el llamado Movimiento del Sombrero se convirtió en uno de los símbolos más visibles de indignación en Uruapan y en buena parte de Michoacán.

Durante las primeras jornadas, muchas de sus consignas encontraron eco en sectores de Morena y

aliados que veían en el movimiento una oportunidad para respaldar el Plan Michoacán y visibilizar la lucha contra la violencia política.

Sin embargo, a medida que se intensificaron las críticas a los gobiernos estatal y federal, surgieron desencuentros públicos: una parte del movimiento acusó que las autoridades reaccionaron tarde y que el plan podría terminar siendo “más de lo mismo”, mientras figuras de Morena y partidos aliados reprocharon que algunos liderazgos del Sombrero se acercaron a fuerzas opositoras, quienes usaron la tragedia para golpear políticamente al gobierno. La escisión se produjo cuando un bloque del Movimiento del Sombrero decidió desligarse de la interlocución directa con el gobierno y adoptar una posición más confrontativa, mientras otro segmento optó por mantener el diálogo con la administración de Sheinbaum y con la nueva alcaldesa -y viuda de Manzo-, Grecia Quiroz.

Dentro de Morena y sus aliados, los dichos han oscilado entre la autocrítica y la defensa cerrada: por un lado, voces internas han admitido que se subestimó el peso simbólico y organizativo del movimiento, y que faltó una respuesta política más sensible en los primeros días; por otro, dirigentes han insistido en que una parte de la ruptura obedece a la intervención de actores que buscan minar al gobierno utilizando la bandera de la seguridad. Aun así, el hecho de que una fracción del Movimiento del Sombrero siga en diálogo con la federación y con la alcaldesa sustituta muestra que la relación entre ciudadanía organizada y gobierno no está completamente rota, sino en una fase de tensión y reacomodo.





Los planes para pacificar Michoacán

Plan / Gobierno	Año de arranque	Eje central declarado	Instrumentos principales	Resultados / límites señalados
Operativo Conjunto Michoacán (Felipe Calderón)	2006	Recuperar territorios tomados por el narco y “restablecer el Estado de derecho”.	Despliegue masivo de Ejército y Marina; operativos conjuntos; aseguramientos de droga y armas.	<ul style="list-style-type: none">• Aumento de homicidios, surgimiento de nuevas facciones, desplazamientos y fosas;• inicio de 19 años de militarización sin paz.
Plan Michoacán (Enrique Peña Nieto)	2014	Combinar seguridad con desarrollo, bajo la idea de que la violencia no se resuelve con fuerza. Reforzar seguridad y atender causas con programas sociales e infraestructura.	Coordinación federal-estatal, inversión en infraestructura, programas de desarrollo regional y refuerzo policial.	<ul style="list-style-type: none">• Resultados limitados; persistencia de cárteles y autodefensas, continuidad de homicidios y extorsión.
Plan de Apoyo Michoacán (Andrés Manuel López Obrador)	2021		Guardia Nacional, programas sociales masivos, apoyo a educación y salud, federalización de nómina magisterial.	<ul style="list-style-type: none">• Sin reducción sostenida de la violencia; persistencia de grupos criminales y debilidad municipal.
Plan Michoacán por la paz y la justicia (Claudia Sheinbaum)	2025	Paz con justicia, desarrollo económico con justicia.	Sin reducción sostenida de la violencia; persistencia de grupos criminales y debilidad municipal. .Más de 10,500 elementos de Guardia Nacional, 1,781 de Marina y 277 de SSPC.	<ul style="list-style-type: none">• Reducción inicial de homicidios (cerca de 50% en 20 días), consolidación de operativos de alto impacto: persistencia de ataques (cochecombos de Cohuayana) obliga a ajustar la estrategia.

HARFUCH,

CALCULAR

EL ESFUERZO FEDERAL



Del quiebre social al **balance histórico**: el caso Manzo abre **protesta, tensión política y comparación** de estrategias.

El rostro operativo del nuevo Plan Michoacán es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza conferencias, coordina con el Gabinete de Seguridad y recorre municipios como Morelia y Uruapan, enviando la señal de que el gobierno federal no se limita a despachar desde la capital. A finales de noviembre, Harfuch presenta cifras que el propio gobierno considera alentadoras: 932 detenidos, 924 armas aseguradas, 22.9 toneladas de droga incautadas y 17 laboratorios desmantelados en pocas semanas, como parte de la ofensiva ligada al Plan Michoacán.

Detrás de estos avances está la aritmética complicada del territorio: 12,514 elementos desplegados en un estado con casi seis millones de habitantes, regiones montañosas, costas, caminos rurales y corredores industriales que requieren una presencia más cercana de las instituciones. El gobierno reconoce que ninguna fuerza federal puede, por sí sola, cubrir cada comunidad, y que la apuesta pasa por un mando único, mejorar capacidades de investigación y construir confianza con las poblaciones que durante años solo vieron pasar operativos temporales.

El caso de Uruapan, con un alcalde asesinado a pesar de sus escoltas, agentes detenidos por presunta complicidad, una viuda convertida en alcaldesa sustituta y una ciudad fuertemente custodiada, ilustra que el reto es enorme, pero también que el Estado federal está dispuesto a sostener la presencia y el respaldo político a autoridades locales que no se pliegan al crimen. Desde Morena se insiste en que la protección a Grecia Quiroz y la continuidad del Plan Michoacán en la región son señales de que, a diferencia del pasado, esta vez no se abandonará a un municipio en el momento en que bajen los reflectores.

COAHUAYANA:

COCHEBOMBA, RUTA ESTRATÉGICA Y AJUSTES EN EL PLAN

Harfuch mide resultados y límites; el atentado lo obliga a ajustar la estrategia en corredores clave.

El estallido del cochebomba en Coahuayana, el 6 de diciembre de 2025, es un recordatorio brutal de la capacidad de daño del crimen organizado, pero también un punto de inflexión para reforzar la estrategia en un corredor que el mismo gobierno identifica como prioritario. La camioneta cargada con explosivos llega desde Colima por la carretera federal 200, la misma que une el puerto de Manzanillo con Lázaro Cárdenas, dos nodos centrales para la entrada de precursores químicos y cocaína, así como para el comercio legal que convive con esas rutas ilícitas.

Las autoridades atribuyen el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación, que busca asegurar para sí el control de ese corredor y debilitar a las policías comunitarias y estructuras locales que resisten su expansión. Coahuayana no es solo un municipio costero productor de plátano y papaya; es un punto clave para entender cómo la disputa criminal se ha desplazado hacia las rutas logísticas que conectan puertos con el resto del país, algo que el Plan Michoacán pretende enfrentar con mayor cooperación entre Marina, Guardia Nacional y comunidades afectadas.

El uso del cochebomba —un recurso parcialmente relegado en años recientes— reaparece como un mensaje de poder y desafío, pero también ha generado una reacción inmediata: refuerzo de presencia federal, revisión de protocolos y un reconocimiento público de que es necesario ajustar la estrategia para blindar la carretera 200 sin criminalizar a la población local. Desde la óptica del gobierno de Sheinbaum, el atentado no cancela los avances del plan, pero obliga a redoblar

esfuerzos en inteligencia, protección de autoridades locales y coordinación con el estado de Colima, para impedir que este tipo de ataques se reproduzcan.

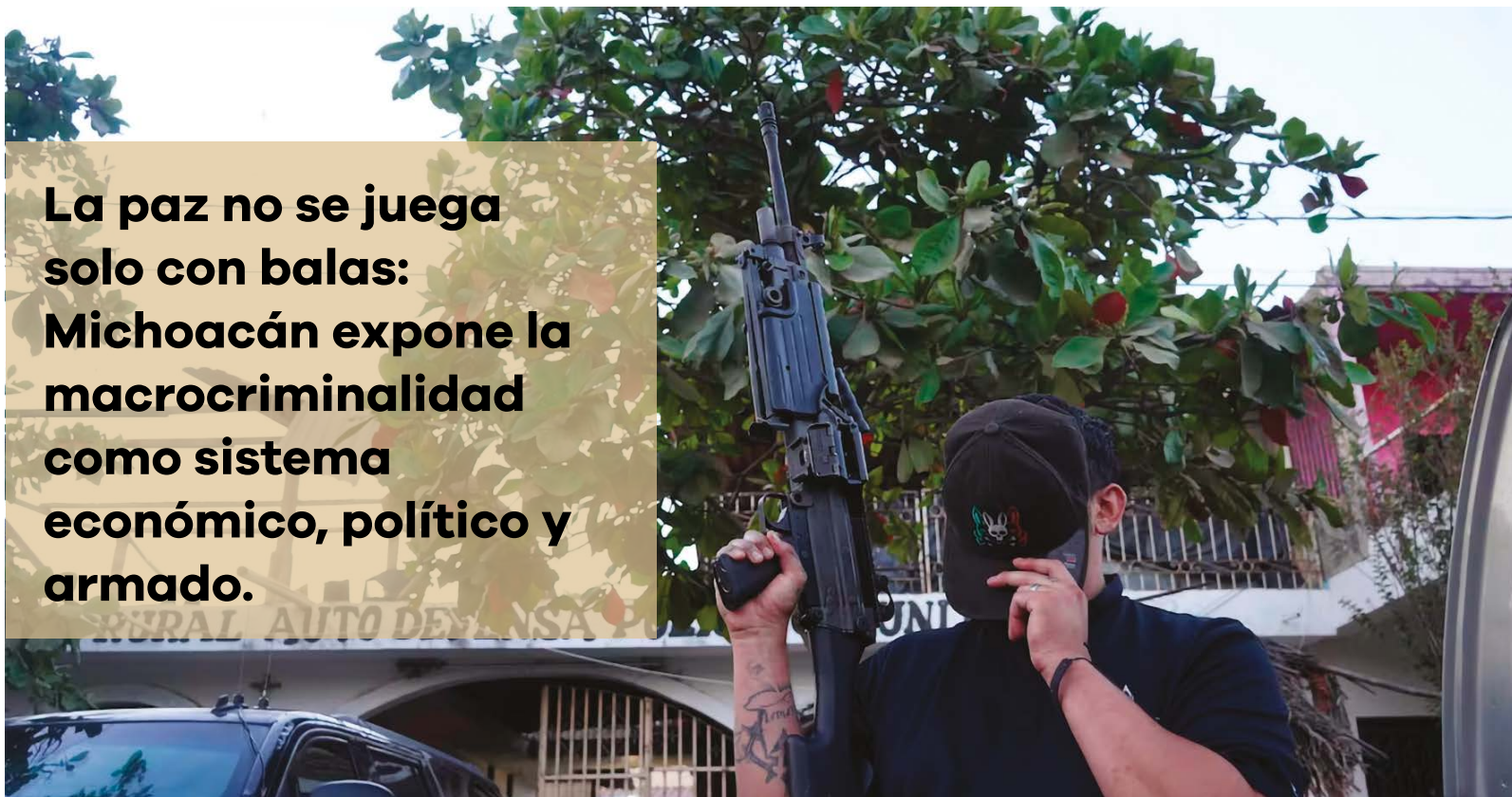
Margen para corregir

El nuevo Plan Michoacán se despliega con la intención de no repetir los errores de las estrategias anteriores: se mantiene el componente de fuerza, pero se agrega una agenda de bienestar, justicia territorial y combate a la extorsión como eje del conflicto. Para el movimiento de la 4T, el gran desafío es demostrar que un enfoque que combina seguridad y



desarrollo puede producir cambios reales en un estado que ha sido intervenido una y otra vez sin resultados duraderos, pero la propia dirigencia reconoce que esto solo será posible si se rompen inercias en gobiernos locales y se escucha más a los movimientos ciudadanos, incluso a los críticos.

La paz no se juega solo con balas: Michoacán expone la macrocriminalidad como sistema económico, político y armado.



CUANDO EL **CRIMEN** SE VUELVE **SISTEMA**

La historia de Michoacán no se escribe solo con cifras de homicidios, sino con la experiencia concreta de comunidades como Uruapan, las tierras limoneras y Coahuayana, donde el Estado y el crimen se han disputado el tiempo, el espacio y la confianza de la gente. En ese escenario, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no es una garantía automática de pacificación, pero sí representa, dentro de la trayectoria de los últimos sexenios, el intento más coherente de articular seguridad, justicia social y

presencia federal sostenida, bajo un gobierno que ha colocado a Michoacán como prioridad nacional y no como problema local aislado. La pacificación real de Michoacán —y de otros estados atravesados por dinámicas similares— exige dejar de mirar solo el “fuego cruzado” y empezar a combatir el edificio completo de la macrocriminalidad que sostiene la violencia. El asesinato de Carlos Manzo, la conspiración que lo hizo posible, el coche-bomba de Coahuayana y el uso de



menores de edad como sicarios muestran que el problema no es solo de balas, sino de estructuras económicas, políticas y sociales que han permitido al CJNG y a otros grupos operar como empresas armadas con impunidad regional.

¿QUÉ ES LA MACROCRIMINALIDAD Y POR QUÉ IMPORTA PARA MICHOACÁN?

En términos de política criminal contemporánea, la macrocriminalidad se

entiende como el conjunto de delitos cometidos por estructuras organizadas que operan de forma sistemática y masiva, con capacidad para infiltrar instituciones, articular redes económicas legales e ilegales y sostener patrones de violencia a gran escala. No se trata de acciones aisladas, sino de sistemas criminales que combinan tráfico de drogas, extorsión, control territorial, corrupción, lavado de dinero y violencia política en un mismo entramado.



Aplicado a Michoacán, esto implica que el problema no es solo que el CJNG quiera la carretera 200 o que cobren piso a productores de limón y aguacate, sino que existe un ecosistema donde existen:

Empresas fachada, operadores financieros y autoridades corruptas garantizan flujos de dinero y protección.

Células armadas, sicarios y “pollitos de colores” ejecutan la violencia necesaria para sostener esos negocios.

Redes políticas locales, municipales y regionales son infiltradas o cooptadas para asegurar contratos, obra pública, permisos y silencios, generando una captura parcial del Estado.

Es decir, la macrocriminalidad en Michoacán no se limita al narco clásico; incluye el control criminal de cadenas productivas completas (aguacate, limón, ganado, madera, minería, transporte de carga), corredores logísticos estratégicos (Manzanillo–Lázaro Cárdenas) y espacios institucionales clave como presidencias municipales, policías y hasta campañas electorales.



Si el Plan Michoacán se queda únicamente en el despliegue de fuerzas federales y en el aseguramiento de armas y droga, golpea síntomas, pero no altera el corazón macrocriminal que hace que el negocio siga siendo rentable y sostenible en el tiempo. Combatir la macrocriminalidad significa, en cambio, asumir que la violencia es el brazo armado de una arquitectura económica y política que hay que dismantelar con la misma seriedad con la que se persigue a los sicarios.



¿Qué tendría que hacerse para pacificar en serio?

El Plan Michoacán y los hechos que lo detonaron, nos brindan al menos cinco líneas de acción si realmente se busca pacificar Michoacán y estados similares (Guerrero, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, etc.) atacando la macrocriminalidad.

1. Inteligencia económica y persecución del dinero

El primer giro de fondo es colocar al dinero, no solo a las armas, en el centro de la estrategia:

- Crear unidades especializadas en análisis financiero regional que crucen información fiscal, bancaria, aduanera y catastral para mapear empresas fachada, testaferros y rutas de lavado.
- Vincular el Plan Michoacán con una política nacional de decomiso patrimonial agresivo que permita congelar cuentas y confiscar bienes ligados a extorsión, acaparamiento de tierras, exportaciones simuladas y contratos públicos manipulados.
- Trabajar con socios internacionales (Estados Unidos, Unión Europea, países asiáticos) para rastrear cadenas logísticas de precursores, contenedores y transferencias financieras asociadas a puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, no solo a cargamentos concretos.

En Michoacán, golpear la macrocriminalidad es, ante todo, golpear la caja registradora de quienes se han apoderado del limón y el aguacate, del transporte en la costa y de los beneficios ilegales de la exportación agrícola.

2. Reconstrucción estatal: municipios, fiscalías y controles internos

El asesinato de Carlos Manzo y el posterior descubrimiento de vínculos de algunos de sus escoltas con el propio CJNG exhiben la fragilidad institucional de los municipios. Para que la macrocriminalidad pierda capacidad de capturar gobiernos locales, se necesita:

- Profesionalizar y blindar las fuerzas del orden con controles de confianza reales, salarios dignos, movilidad territorial (para evitar que todos sean reclutados localmente) y esquemas de rotación que reduzcan el riesgo de captura.
- Fortalecer las fiscalías estatales, hoy desbordadas, con unidades de casos de alto impacto que investiguen estructuras complejas (como la conspiración para matar a Manzo) y no solo expedientes fragmentados por homicidio.
- Establecer mecanismos federales de supervisión y auditoría sobre áreas críticas: licitaciones, concesiones de obra pública, creación de mandos únicos policiales, direcciones de seguridad y oficinas de catastro, que suelen ser puntos de entrada del crimen al aparato estatal.



En la lógica de Morena y del gobierno federal, esto implicaría pasar de un Estado que reacciona a un atentado —como el de Coahuayana— a un Estado que entra a los expedientes patrimoniales y políticos de los grupos criminales, y de quienes les abren la puerta desde las instituciones.

3. Protección estratégica a liderazgos comunitarios y autoridades

La conspiración para asesinar a Carlos Manzo no fue un impulso espontáneo: combinó inteligencia criminal sobre sus rutinas, aprovechamiento de un evento público masivo, uso de un sicario menor de edad y presuntas filtraciones dentro de su propio equipo de seguridad. Si se quiere evitar que el asesinato de alcaldes y líderes rurales se vuelva norma, se requiere un esquema nacional de protección estratégica:

- Protocolos diferenciados para alcaldes y liderazgos comunitarios en regiones de alto riesgo, que incluyan análisis de amenazas, controles sobre escoltas, circuitos de movilidad y coordinación efectiva entre municipios, estados y federación.
 - Mecanismos rápidos para sustituir y proteger a familiares que asumen cargos —como ocurrió con Grecia Quiroz— de forma que no queden expuestos a represalias sin un acompañamiento integral de seguridad, psicológico y político.
 - Canales directos de denuncia y alerta temprana para productores agrícolas, líderes comunitarios, defensores de tierras y periodistas, con capacidad real de respuesta y no solo buzones formales.
- Sin estas medidas, la macrocriminalidad seguirá utilizando asesinatos selectivos (como el de Manzo o el de Bernardo Bravo) para quebrar resistencias, disciplinar a las élites locales y mandar mensajes a la población.

4. Integrar la dimensión territorial: rutas, puertos y economías locales

La explosión del cochebomba en Coahuayana muestra que la disputa ya no es solo por plazas urbanas, sino por la carretera federal 200, por el control de pasos clave para conectar Manzanillo con Lázaro Cárdenas y, desde ahí, con el resto del país. Pacificar Michoacán implica:

- Diseñar zonas de seguridad logística en torno a los corredores portuarios y carreteros que integren a Marina, Guardia Nacional, aduanas, SAT, autoridades estatales y comunidades locales.
- Regular y transparentar el transporte de carga en esos tramos: quién mueve qué, con qué permisos, con qué empresas, evitando que los camiones de fachada y los cargamentos contaminados se pierdan en la invisibilidad del flujo comercial.
- Impulsar alternativas económicas y de gobernanza en municipios costeros y de sierra (como Coahuayana) para que las policías comunitarias no queden solas ni se vuelvan blanco fácil de represalias.



En Michoacán, el crimen controla rutas porque la economía lícita y el Estado llegaron tarde o llegaron a medias; revertir la macrocriminalidad demanda un proyecto territorial que dé a la población una razón concreta para defender la legalidad.

5. POLÍTICA SOCIAL FOCALIZADA Y JUSTICIA TRANSICIONAL LOCAL

El componente social del Plan Michoacán —Ferias de Bienestar, asambleas con pueblos originarios, programas educativos y culturales— es un avance frente a estrategias puramente punitivas, pero si se quiere realmente desactivar estructuras macrocriminales, se necesita ir más lejos:

- Programas específicos para regiones donde la economía criminal se volvió casi la única fuente de ingresos, combinando apoyos productivos, crédito y acompañamiento técnico para reconstruir cadenas lícitas (por ejemplo, limón y aguacate sin extorsión).
- Mecanismos locales de verdad, memoria y reparación, al menos a nivel comunitario, que reconozcan a víctimas de extorsión, desplazamiento y violencia política, y que permitan nombrar públicamente las redes de complicidad y omisión.
- Programas de reinserción para jóvenes que han participado en estructuras criminales de bajo nivel, especialmente en funciones logísticas o armadas, para que abandonar la organización no signifique una condena social o económica automática.
- Esta perspectiva, más cercana a una justicia transicional adaptada a la violencia criminal, permitiría que la pacificación no se limite a “bajar la cifra de homicidios”, sino a transformar las condiciones que hacen sostenible la macrocriminalidad.



MENORES DE EDAD, “POLLITOS DE COLORES” Y LA LÓGICA DEL SACRIFICIO

El asesinato de Carlos Manzo, según las investigaciones difundidas, fue cometido por un menor de edad reclutado como sicario por el CJNG, integrante de esa generación de adolescentes utilizados como brazo visible y desechable de la organización. En el argot criminal, muchos de estos jóvenes son conocidos como “pollitos de colores”, por ser fácilmente reemplazables.

La lógica de su reclutamiento es brutal pero racional desde la perspectiva criminal:

Son menores de edad, por lo que, en caso de ser detenidos, enfrentan penas menores, medidas de internamiento o la posibilidad de ser tratados en sistemas especiales de justicia juvenil.

Crecieron en entornos donde la presencia del Estado ha sido fragmentaria y donde el crimen ofrece ingreso inmediato, reconocimiento, pertenencia y acceso a bienes de consumo que el mercado legal les niega.

Son el rostro más visible del delito, pero el eslabón más débil de la cadena: ejecutan, huyen, mueren o son capturados, mientras que los mandos medios y altos permanecen relativamente protegidos.

En el caso de Manzo, el menor que dispara es abatido casi de inmediato en circunstancias que hoy están bajo escrutinio: la acusación contra varios miembros del equipo de seguridad del alcalde sostiene que, lejos de someterlo y entregarlo con vida, lo ejecutaron cuando ya estaba reducido. Las investigaciones apuntan a que algunos de esos escoltas tenían vínculos con el mismo CJNG que ordenó el asesinato, y que la muerte del joven sirvió para borrar un testigo incómodo que podría haber revelado detalles de la conspiración y de la cadena de mando.

ESE EPISODIO CONDENSEA TRES PROBLEMAS ESTRUCTURALES:

1. La infiltración criminal de cuerpos de seguridad municipales y de escoltas de autoridades electas, que convierte los dispositivos de protección en parte del riesgo.
2. El uso instrumental de menores de edad como piezas sacrificables, cuya vida vale menos que el costo de que hablen ante un juez.
3. La dificultad del Estado para ofrecer a esos jóvenes una salida distinta al crimen, más allá de la detención o de la muerte.



Cualquier estrategia seria contra la macrocriminalidad debe incorporar un eje específico sobre niñez y adolescencia en comunidades permeadas por la violencia organizada:

- Identificación temprana de zonas y escuelas donde el reclutamiento forzado o seductivo es más intenso, con intervención de programas sociales, acompañamiento comunitario y trabajo con familias.
- Reformas a los sistemas de justicia para adolescentes que permitan sancionar con inteligencia (y no solo castigar), distinguiendo claramente entre quienes son víctimas de reclutamiento y quienes, sin dejar de tener responsabilidad, han sido utilizados como instrumentos desechables.
- Programas de salida para jóvenes que deseen abandonar las organizaciones,

con protección, cambio de residencia y alternativas económicas reales, de forma similar a programas de desmovilización igual que ocurre con menores desmovilizados de conflictos armados internos.

Mientras el Estado no logre que un adolescente vea más futuro en la escuela, en el campo o en un empleo digno que en un sueldo de sicario, la macrocriminalidad seguirá teniendo una cantera inagotable de “pollitos de colores” dispuestos —o forzados— a ejecutar el siguiente atentado.

La clave estará en que el Plan Michoacán no se agote en operativos espectaculares ni en conferencias, sino que se traduzca en una transformación profunda de las condiciones que permitieron la conspiración contra Manzo, el avance del CJNG sobre corredores estratégicos y la utilización masiva de menores de edad como carne de cañón. Pacificar el estado, y con él a otras entidades federativas con problemáticas similares, implica reconocer que la violencia no es solo un problema de balas, sino de macrocriminalidad; y que derrotarla requiere un Estado que piense grande, actúe coordinado y ponga en el centro a las comunidades que durante años han vivido entre el miedo y la resignación.





EL RELEVO

QUE REORDENA LA FISCALÍA

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República no es relevante solo por el nombre que deja el cargo ni por quien lo ocupa después, sino por la forma en que se procesó, discreta y con poco margen para el debate público. En un país donde la justicia federal arrastra una historia larga de capturas políticas, la manera del relevo también es un dato político. La llegada de Ernestina Godoy, ratificada por el Senado con mayoría calificada tras firmar un decálogo de compromisos, se inscribe en un momento delicado del nuevo sexenio, cuando el poder busca eficacia, coordinación y control de daños, pero también legitimidad institucional. Para México, y para una región latinoamericana donde las fiscalías suelen convertirse en instrumentos del Ejecutivo, el relevo en la FGR funciona como espejo incómodo, no tanto de lo que se dice sobre la autonomía, sino de lo que se hace con ella.

El anuncio no sorprendió a nadie, fue sin pedagogía política, sin tiempo para la digestión pública. La renuncia de Gertz Manero se conoció cuando todavía se discutía, en círculos cerrados, si el fiscal resistiría el cierre de año, y terminó formalizándose con

La renuncia de Gertz y la ratificación de Godoy como fiscal general abren dudas sobre cómo se mueve el poder en la justicia federal cuando los acuerdos van por delante otra vez.

una carta al Senado en la que informó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como embajador ante un “país amigo”, presentada como causa grave para dejar el cargo. El sistema político reaccionó después. El Senado aceptó la renuncia con rapidez, en una votación que dividió a la oposición y confirmó que el desenlace había sido pactado de antemano. La discusión pública, todavía más tarde.

Cuando la rapidez sustituye a la deliberación

En el papel, la Fiscalía General de la República es autónoma. En la práctica, su titular define prioridades que cruzan seguridad, economía y política exterior. Casos de corrupción de alto nivel, investigaciones sobre crimen

organizado, cooperación con Estados Unidos en materia de fentanilo y lavado de dinero, todo pasa, de una forma u otra, por ese despacho. Por eso la rapidez incomoda.

El diseño constitucional coloca al Senado como un actor central en el proceso de sucesión. No como notario, sino como espacio de negociación y control político. Sin embargo, en esta ocasión, el tiempo político marcó otro ritmo. El debate llegó cuando el desenlace ya era evidente y terminó con una votación bastante holgada a favor de Godoy, impulsada por el bloque oficialista y parte de la oposición a cambio de compromisos escritos, mientras un sector opositor apostó por el voto en contra, nulo o abstenerse. La discusión se volvió trámite.

No porque el procedimiento haya sido ilegal, sino porque fue políticamente asimétrico, el poder ya se había movido antes de que las instituciones reaccionaran. La era Gertz cerró con una salida diplomática y la nueva fiscal asumió con el respaldo del bloque mayoritario, pero sin una deliberación pública real sobre el tipo de autonomía que se espera de la FGR.

EL CIERRE DE UN CICLO INCÓMODO

La salida de Gertz Manero **marca el fin pragmático de una etapa** en la Fiscalía donde la autonomía prometida **nunca terminó de cuajar** y el desgaste político se volvió inevitable.

Gertz Manero llegó a la Fiscalía con la promesa de profesionalizar una institución marcada por inercias del viejo régimen y por una reputación asociada a la impunidad administrada. La apuesta era bastante clara en el discurso y muy compleja en la práctica: convertir la antigua PGR en un órgano capaz de investigar sin pedir permiso y de sostener casos más allá del primer amparo. Gertz se presentó como el hombre del método, jurista con oficio y experiencia. Pronto, sin embargo, quedó claro que la autonomía no se construye con credenciales, sino con voluntad política y compromiso.

Su gestión dejó expedientes abiertos y conflictos que no siempre se explicaron con detalle, pero que se percibieron con claridad. Hubo confrontaciones públicas, fricciones internas, tensiones con otras instancias del Estado y una sensación persistente de justicia administrada a ritmos políticos. En algunos casos, la Fiscalía avanzó con fuerza. En otros, pareció moverse con cautela excesiva.



Esa irregularidad alimentó la crítica desde frentes distintos. La oposición habló de selectividad y uso político de la maquinaria penal. Desde sectores críticos del oficialismo, el reclamo fue otro, no persecución, sino falta de resultados. Se esperaba que la narrativa anticorrupción se tradujera en condenas. Lo que predominó fueron procesos largos, anuncios ruidosos y desenlaces algo menos contundentes. El costo fue

institucional.

Con el tiempo, el fiscal se volvió una figura incómoda incluso para quienes lo habían respaldado por conveniencia. No por un escándalo único, sino por el desgaste acumulado. Diferencias con el nuevo momento político, roces con el aparato de justicia y una Fiscalía que no consiguió sacudirse el escepticismo público. En México, cuando la justicia falla, se denuncia. Cuando funciona, se duda. En ese clima, cada decisión se leyó como mensaje y cada silencio como negociación.

Por eso su salida no se interpretó como una admisión de errores ni como una victoria política clara. No hubo relato de cierre ni gesto de rendición de cuentas. Fue un movimiento pragmático. El final de un ciclo que dejó de encajar en el nuevo equilibrio del poder. Sin ceremonia. Sin defensa. Cuando un fiscal general se va así, lo que queda no es solo la evaluación de su gestión, sino la pregunta por el arreglo político que lo sostuvo.





LA FGR HEREDADA

La nueva titular recibe una Fiscalía pesada, con rezagos internos, tensiones políticas y una autonomía formal que rara vez se ejerce sin costos.



La Fiscalía General de la República que recibe el nuevo sexenio no es una institución en blanco ni una maquinaria lista para reorientarse con solo cambiar de titular. Es un aparato pesado, con inercias acumuladas, lealtades internas formadas durante años, décadas incluso, y una relación frágil con la confianza pública. Más que una estructura ordenada, la FGR arrastra expectativas incumplidas, reformas a medio camino y una autonomía que existe en la Constitución pero que, en la práctica, se ejerce de forma intermitente.

En su interior convive con un rezago que no siempre se mide en cifras, sino en tiempos muertos. Carpetas que avanzan

con lentitud, áreas saturadas, fiscalías especializadas bajo presión política y presupuestal. El problema no es solo técnico. Es cultural. La institución sigue operando, en muchos sentidos, con la lógica de administrar conflictos más que de resolverlos. Eso produce una justicia distante, selectiva, difícil de leer para las víctimas y demasiado predecible para los actores con poder. La relación con las fiscalías estatales tampoco es tersa. El modelo federal supone coordinación, pero en los hechos persisten disputas por competencias, celos políticos y una fragmentación que dificulta investigaciones de alcance nacional. En casos de alto impacto, la FGR suele aparecer tarde o de forma parcial, reforzando la imagen de una institución reactiva más que conductora. El resultado es una justicia dispersa, donde cada nivel del Estado opera con incentivos y tiempos propios.

A esto se suma una deuda profunda con las víctimas. Aunque el discurso insiste en acceso a la justicia y reparación del daño, la experiencia cotidiana es otra. Procesos largos, información opaca, decisiones que no se explican. Para muchos, la Fiscalía no es un espacio de protección, sino un laberinto que desgasta. Esa distancia no se corrige con nombramientos ni con declaraciones públicas, sino con señales sostenidas que hasta ahora han sido escasas.

En el terreno político, la FGR hereda además una presión constante por mostrar resultados inmediatos. El nuevo gobierno necesita eficacia, cifras y mensajes claros. Pero la justicia no se produce al ritmo de los comunicados. Cada expediente relevante se vuelve una prueba de lealtad o de desafío, y cada investigación sensible se interpreta como gesto político incluso antes de avanzar jurídicamente. Esa carga condiciona su margen de maniobra.

Así, la Fiscalía que hereda el sexenio es una institución tensionada desde dentro y desde fuera. No está colapsada, pero tampoco fortalecida. Funciona, con grietas visibles. El nuevo liderazgo ya empezó a mover piezas: en enero de 2026, Godoy anunció once nombramientos en áreas clave, varios provenientes del círculo capitalino, lo que muestra a la vez voluntad de control interno y continuidad política. La disyuntiva sin embargo sigue ahí: ajustarse a las inercias para garantizar gobernabilidad o intentar modificarlas asumiendo el costo político.

ERNESTINA GODOY Y EL ANTECEDENTE CAPITALINO



Godoy llega a la FGR con experiencia y respaldo político, pero con una autonomía federal aún por demostrar.

La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República no puede leerse como un punto de partida limpio. Arrastra una historia inmediata que pesa más que cualquier promesa futura. Su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México funcionó como un laboratorio político y jurídico donde se ensayaron esquemas de coordinación estrecha con el poder ejecutivo local, se enfrentaron resistencias internas y se trazaron líneas claras frente a la oposición.

Godoy construyó una fiscalía con mayor visibilidad pública y con un discurso alineado a la idea de que la justicia debía acompañar el proyecto político en curso. Hubo investigaciones que avanzaron con rapidez y otras que se volvieron símbolos de confrontación. Cada caso relevante se leyó no solo en términos jurídicos, sino como gesto de poder. Esa dinámica fortaleció su posición, pero con el costo de perder contacto con algunas organizaciones civiles. La fiscal dejó de ser vista como

una operadora para asumirse como figura política con nombre propio.

En la Ciudad de México, Godoy mostró capacidad de control interno y disciplina institucional, pero también una inclinación a privilegiar la narrativa de resultados por encima de la explicación jurídica, lo cual en ocasiones la dejó vulnerable a otras narrativas, incluyendo algunas provenientes del mismo bloque oficial.

Su llegada a la FGR ocurre, además, en un terreno mucho más complejo. A diferencia del ámbito local, el nivel federal multiplica actores, intereses y presiones externas. No solo está el Ejecutivo. Están los gobernadores, las fiscalías estatales, las Fuerzas Armadas, el sistema financiero y la mirada constante, impertinente, de Estados Unidos. El margen de maniobra se estrecha y la tentación de replicar esquemas conocidos es alta. Lo que funcionó en la capital pudiera no ser suficiente en una institución con déficits de legitimidad antiguos.

El punto delicado no es si Godoy tiene

experiencia o capacidad operativa. Eso está fuera de discusión. El punto es si podrá construir una distancia creíble respecto del poder político que la respalda. No una ruptura artificial, es una separación funcional que permita a la Fiscalía lanzarse a profundidad contra ciertos actores que abusen de su poder. Hasta ahora, su trayectoria muestra eficacia en la coordinación, pero deja abierta la incógnita sobre su disposición a sostener conflictos que puedan debilitar al bloque en su conjunto por provenir de sectores con respaldo popular, incluso después de haber sido electa con mayoría calificada y respaldos cruzados en el Senado.

Por eso su nombramiento genera lecturas encontradas. Para algunos representa orden y alineación estratégica en un momento de urgencias; Para otros, una tendencia a consolidar fiscalías que operan políticamente atendiendo aún más que lo estrictamente legal. Ninguna de esas lecturas se resolverá con declaraciones iniciales ni con un decálogo de buenas intenciones. Se resolverá, como siempre, en los expedientes que se abran y en los que se decida no abrir. Godoy llega con un capital político alto, un equipo cada vez más afin.



AUTONOMÍA, COORDINACIÓN Y UNA LÍNEA DELGADA



Desde el primer momento, la nueva fiscal habló de colaboración con el gabinete de seguridad. La frase no sorprende. Se ha repetido durante años, casi como una contraseña de entrada al cargo. Coordinación, trabajo conjunto, alineación de esfuerzos. El lenguaje es conocido con su respectivo contexto. México vive bajo una presión constante por mostrar resultados inmediatos frente a la violencia, el crimen organizado y los delitos de alto impacto.

La línea entre colaborar y subordinarse es tenue, y rara vez se cruza de golpe. Se cruza por acumulación. Primero en las agendas compartidas. Luego en las prioridades que se fijan fuera de la institución. Más tarde en los tiempos que se imponen desde el poder político. La justicia, entonces, deja de moverse a partir de expedientes y comienza a responder a calendarios ajenos. Cuando eso ocurre, la autonomía no se pierde en el discurso, sino en la práctica cotidiana.

La urgencia es un argumento poderoso. La violencia no espera, las víctimas tampoco, y el Estado necesita respuestas visibles. Pero la justicia no opera bien bajo presión permanente. Los procesos penales requieren tiempo, prueba. Forzar resultados rápidos suele producir investigaciones endebles, detenciones espectaculares y resoluciones frágiles que se desmoronan con facilidad. El costo no es solo jurídico, es político. Cada caso mal armado erosiona la credibilidad de la institución y refuerza la percepción de que la Fiscalía sirve a objetivos inmediatos más que a un mandato de largo plazo.



Respetando la independencia de cada organismo, la estrategia de seguridad requiere coordinación.





WASHINGTON OBSERVA

El relevo en la Fiscalía General de la República no ocurre en el vacío ni se procesa únicamente dentro de las fronteras mexicanas. Estados Unidos observa con atención cada movimiento en las áreas encargadas de perseguir redes de narcotráfico, tráfico de fentanilo y flujos financieros ilícitos, no por cortesía diplomática, sino porque buena parte de su propia agenda de seguridad depende de la eficacia y previsibilidad de las instituciones mexicanas. La relación no se sostiene solo en operativos conjuntos o intercambios de información. Se sostiene, sobre todo, en confianza institucional. Y esa confianza es frágil, y quebrar puede tener en estos tiempos un costo que puede ir más allá de lo simbólico y político.

Para Washington, el problema no es ideológico ni retórico. Es operativo. Una fiscalía percibida como alineada políticamente puede ofrecer resultados rápidos en el corto plazo, pero introduce una duda que pesa más con el tiempo. Hasta dónde llegan realmente las investigaciones. A quién tocan y a quién evitan.

QUÉ REDES FINANCIERAS SE PERSIGUEN Y CUÁLES QUEDAN FUERA DEL RADAR.

La cooperación internacional se basa menos en declaraciones públicas que en la consistencia de los expedientes. Cuando los casos avanzan con lógica clara y criterios estables, la confianza se fortalece. Cuando aparecen señales de selectividad, esa confianza se erosiona sin necesidad de comunicados oficiales. El fentanilo es el punto más sensible de esa relación. No solo por su impacto social en Estados Unidos, sino porque obliga a mirar más allá de los laboratorios y los decomisos espectaculares. Implica seguir rutas de dinero, estructuras logísticas, complicidades locales y omisiones institucionales. Ahí es donde la Fiscalía se vuelve un actor central. No basta con detener operadores menores. Se requiere sostener investigaciones largas, complejas y políticamente incómodas.



Desde finales de 2025, la presión aumentó cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo ilícito y a sus principales precursores como armas de destrucción masiva, con el argumento de que causan tantas muertes como un ataque bélico. La medida abrió la puerta a movilizar más recursos federales estadounidenses, endurecer la persecución contra cárteles y redes financieras y exigir una cooperación más intensa a países como México. En paralelo, el gobierno mexicano relanzó la narrativa de colaboración “por razones humanitarias”, insistiendo en que la coordinación con Estados Unidos busca evitar que el fentanilo llegue a jóvenes y comunidades vulnerables. En ese contexto, cada decisión de la FGR —a quién extradita, qué cuentas congela, qué casos persigue hasta el final— se convierte en un mensaje que se lee en la Ciudad de México, pero también en Washington.



Visita nuestros puntos de venta
y reserva el viaje de tus sueños.



Huatulco

Hasta

55%

de descuento

Puerto Vallarta

Hasta

62%

de descuento

Cancún

Hasta

62%

de descuento

Formas de pago: Sistema de Apartado, Efectivo, Tarjeta de débito y crédito.

*Consulta terminos y condiciones.



Más plantas, más demanda y una red que corre contra el tiempo

La nueva central de ciclo combinado El Sauz II fue presentada; una obra limpia, ordenada: 269 megawatts más para el Sistema Eléctrico Nacional, más de cuatro millones de personas beneficiadas en Querétaro y el Bajío, un déficit de capacidad que empieza a cerrarse. Pero debajo de esa postal existe un gran reto: la Comisión Federal de Electricidad entra a una década en la que tiene que correr como no lo ha hecho en muchos años, la red se está saturando, la demanda aumenta mucho más rápido que la oferta, y se debe hacer todo desde la soberanía energética.

LA VISIÓN DESDE PALACIO NACIONAL

La administración de Claudia Sheinbaum decidió arrancar su sexenio con una promesa energética enorme: el Plan de Expansión CFE 2025-2030. No se trata solo de unas cuantas obras sueltas, sino de un paquete que, según el propio gobierno, incluye 78 proyectos de generación, transmisión y energías renovables, con una inversión pública que supera los 4,300 millones de dólares y se apalanca con recursos privados por 45 mil millones de dólares

El Sauz II inaugura una etapa crítica; la CFE acelera obras mientras la demanda eléctrica crece más rápido que la red.

adicionales. El mensaje viene claro también desde la tribuna: el Estado quiere mantener la batuta del sistema eléctrico y, al mismo tiempo, usar el dinero privado para llenar los huecos de la red y de la generación.

En una parte del plan están las plantas que funcionan con gas natural y prometen respaldo constante: ciclos combinados en Querétaro, San Luis Potosí; Salamanca y otros puntos donde la demanda industrial ya devoró a la infraestructura. En la otra, un catálogo de proyectos solares, eólicos y de almacenamiento que busca

una transición energética más tersa y el rescate de México del rincón de los rezagados en compromisos climáticos. Sobre el papel, todo parece alineado: más capacidad firme para evitar apagones, más renovables para demostrar a los socios comerciales que el país no se quedó clavado en el siglo pasado, y una expansión de la red que promete liberar cuellos de botella que llevan años presionando estados completos.

El problema aparece cuando se cruzan estos anuncios con la letra pequeña de los documentos técnicos. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024-2038 reconoce que, entre 2022 y 2023, la demanda eléctrica creció 3.5%, mientras la capacidad de generación apenas subió 0.6%. Un terrible desfase: el país enciende más motores, más aires acondicionados, más líneas de producción, pero las nuevas plantas no llegan con la misma velocidad.

Y aún no contamos con centros de datos dedicados a la Inteligencia Artificial (IA), que los habrá y agregarán mayor presión a la red.

EL SAUZ II,

LA VITRINA DEL BAJÍO



La nueva central en Querétaro exhibe el esfuerzo por evitar apagones en un corredor industrial al límite.

Así, la central de ciclo combinado El Sauz II, rebautizada “Josefa Ortiz Téllez Girón”, se vuelve vitrina, estampa de lo que justo el país necesita. Está en Pedro Escobedo, Querétaro, una zona que ya no es solo paso entre Ciudad de México y el norte, sino parte de un corredor industrial que crece a un ritmo que pone de nervios a quienes planifican los requerimientos energéticos del país. La propia directora de la CFE, Emilia Calleja Alor, aceptó en la inauguración que, este año, Querétaro tuvo una demanda máxima de 1,535 MW, mientras su capacidad instalada se quedaba en 723 MW. La diferencia se sostuvo con energía que venía de otros estados, pero a costa de apretar más una red que ya venía ajustada en el centro del país.

El Sauz II agrega 269 MW y se coordina con dos gigantes que ya estaban en marcha o en fase de arranque: Salamanca

I, con 958 MW, y Villa de Reyes, con casi 450 MW. Juntos, esos proyectos prometen inyectar alrededor de 1,677 MW adicionales que, según los planes, garantizarían que el estado deje de vivir al día en materia de electricidad. A eso se suma la obra proyectada de Salamanca II, con otros 483 MW, un seguro frente a la fiebre industrial del Bajío.

Lo que nadie quiere decir abiertamente es que la zona había empezado a jugar con fuego. Querétaro proyectó su imagen de polo seguro para el nearshoring mientras, en contraste, la gráfica de capacidad local mostraba un hueco que se va haciendo más grande. Empresas de tecnología, automotrices y centros logísticos llegaron con la idea de que el suministro estaba resuelto, pero la realidad planteada en el PRODESEN y otros reportes de planeación apuntaba

a un límite que se acercaba rápido. El Sauz II llega como cortafuegos: una planta de gas natural de ciclo combinado, con sistema de enfriamiento seco para ahorrar agua y generar un menor impacto ambiental frente a las centrales viejas que aún queman combustóleo o carbón. A la inauguración acudieron la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Luz Elena González y la dirección de la CFE, convertida en protagonista de un acto pensado para mandar una señal: es el gobierno —no en absoluto las empresas privadas— quien llega a tiempo a rescatar el sistema. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, agradeció la obra y recordó que, durante las lluvias de octubre, la CFE restableció el suministro en el estado en cuestión de horas, comparándolo con desastres en Estados Unidos donde los apagones pueden durar semanas.

¿QUÉ MÁS REQUIERE LA RED?

Sin nuevas líneas y subestaciones, la generación renovable no llegará a ciudades ni fábricas.

Si se mira el sistema como un mapa de líneas y subestaciones, el principal enemigo de la CFE no está solo en la generación, sino en la red de transmisión y distribución. El propio gobierno admite, transmisión para integrar entre los 15 y 20 GW de renovables que se generarán hacia 2030. El dato duele todavía más cuando se lee que, en los últimos seis años, apenas se construyeron 100 kilómetros de líneas, una cifra mínima frente a lo que se requiere.

El Plan de Expansión CFE 2025-2030 intenta corregir ese rezago con una propuesta agresiva: 275 nuevas líneas de transmisión, equivalentes a 6,735 kilómetros circuito, y 524 obras en subestaciones eléctricas en todo el país. Solo para 2025 y 2026 se enumeran 66 proyectos de transmisión con una inversión acumulada de 1,916 millones de dólares, bajo esquemas de financiamiento como OPF y FIBRA

E. La apuesta es un reto gigantesco, será como correr un maratón después de estar muchos años sentado viendo la televisión: no basta con dibujar las rutas, hay que llegar al ritmo que exige la demanda. El PRODESEN 2024-2038

y el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión repiten el mismo diagnóstico: sin redes nuevas, la energía renovable que

se proyecta para el norte y el centro no se podrá trasladar a donde están las ciudades y las fábricas. Hay zonas como la península de Yucatán que padecen infraestructura insuficiente para cubrir picos de consumo, y que han visto apagones y restricciones justamente por no tener líneas suficientes ni respaldo firme a la altura del crecimiento turístico.

Aquí otro tema: el gobierno presenta metas de generación limpia —en 2023 la generación limpia se quedó en 24.3%, lejos de la meta del 35% que se había originalmente

planteado—, pero al mismo tiempo ha frenado o enredado la entrada de capital privado en el mercado eléctrico, que fue el que construyó buena parte de los parques eólicos y solares de la década pasada. El

IMCO advierte que, sin un ambiente propicio para la inversión pública y privada, las proyecciones del PRODESEN —más de 68,000 MW adicionales entre 2028 y 2038, con 80% de capacidad limpia— no alcanzarán a ver la luz.

La doble vida de la CFE: empresa pública y empresa del

Estado

La CFE opera en dos hemisferios al mismo tiempo como un cerebro humano. Uno es el de las cifras y los balances, donde se mide cuánta energía se inyecta al sistema, cuánto se pierde en la red, cuántos proyectos se cierran en tiempo y forma. El otro hemisferio es su papel de guardián de la soberanía, muro frente a las empresas extranjeras y salvavidas en desastres naturales.





En el primero, el reto es rudo: el país necesita más capacidad instalada a un ritmo que no ha logrado en los últimos años, modernizar equipos viejos y reducir pérdidas que en algunas zonas todavía son altas. La red de distribución, la que llega a colonias y pueblos, sufre un desgaste de varias décadas, las conexiones irregulares y la falta de inversiones sostenidas; allí se pierden gigawatts que se necesitan en otras partes del país.

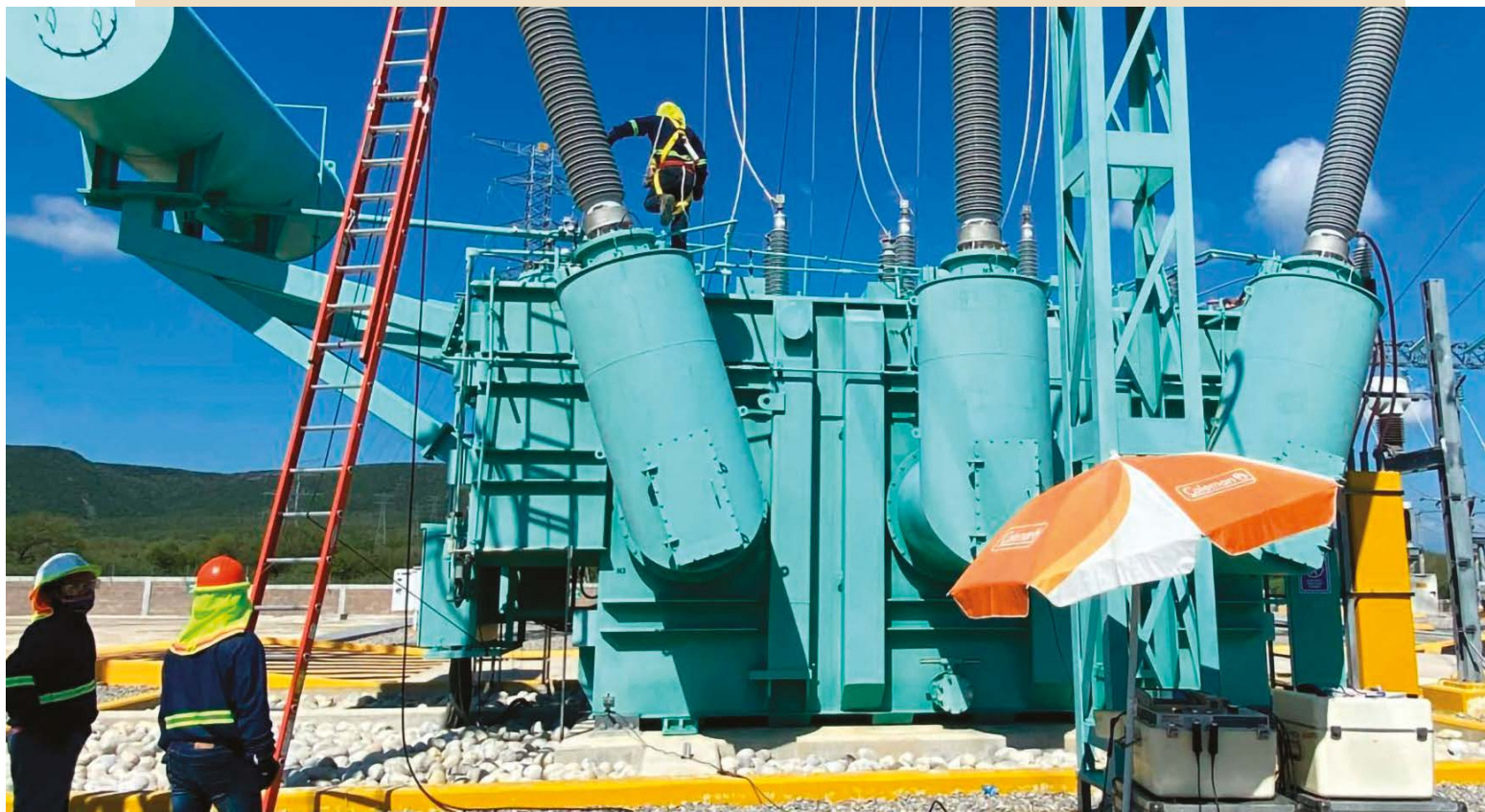
En el segundo hemisferio con el que opera la CFE, la empresa celebra logros como la inauguración de El Sauz II. Son escenarios donde se repite que el 54% de la generación eléctrica corresponde al Estado y que eso debe mantenerse frente a cualquier renegociación comercial, incluyendo el mismísimo T-MEC. Al mismo tiempo, el propio plan de expansión reconoce, aunque no lo diga explícitamente, que sin capital privado no hay manera de alcanzar los objetivos de nueva capacidad y redes.

Más tensión entonces: En las condiciones actuales son necesarias las empresas eléctricas privadas, conviven con el diseño de esquemas de coinversión, asociaciones y financiamiento compartido para los proyectos de transmisión y energías limpias. Nadie lo va a decir en voz alta: la CFE no puede sola. No con el ritmo de demanda que marca la información disponible, ni con la presión de zonas que quieren aprovechar el nearshoring y amenazan con irse a otro lado si no se les garantiza energía suficiente y confiable.

LA DÉCADA DE LA SATURACIÓN

Los números que recoge el PRODESEN pintan una década donde el sistema eléctrico mexicano va a vivir al borde. La demanda máxima crece alrededor de 2.6% anual, el país se encamina a años donde cualquier retraso en obras nuevas se traduce en riesgos concretos: apagones regionales, restricciones a nuevas conexiones industriales, incluso conflictos políticos abiertos entre estados y federación. La península de Yucatán ya lo sabe. Información oficial y análisis independientes están de acuerdo en que la región acumula rezagos en infraestructura eléctrica que la dejan expuesta en temporadas de calor y turismo alto. La respuesta prometida incluye nuevas líneas, refuerzos de transmisión desde el sureste y algunas plantas que se han anunciado como solución, pero el reloj corre más rápido que los tiempos de licitación, construcción y puesta en operación.





En el norte del país pasa algo distinto, pero igual de incómodo. Hay zonas con potencial enorme para renovables —sobre todo solar y eólica—, pero la red no está lista para sacar esa energía hacia los grandes centros de consumo. Mientras no se construyan las líneas que propone el Plan de Expansión 2025-2030, muchos proyectos se quedan sobre la mesa o atrapados en litigios, permisos y negociaciones. La CFE se enfrenta a una disyuntiva: abrir más la puerta a alianzas con el sector privado o cargar sola con el peso financiero y operativo de un sistema que ya se saturó.

¿QUÉ SIGNIFICA EL SAUZ II DENTRO DE TODO ESTO?

El Sauz II no es solo una planta más en la lista de obras nuevas. Es la foto de cómo el gobierno necesita que funcionen sus planes: tecnología moderna, gas natural, uso restringido de agua, combinación de soberanía estatal y coinversión con privados que sea conveniente para todos los

involucrados. También es la prueba de que el país puede resolver los cuellos de botella, como el que venían creciendo en el Bajío desde hace años.

La central permite que Querétaro deje de depender tanto de energía que viaja desde otros estados para alimentar su crecimiento industrial, aunque no elimina el problema de fondo: la demanda va a seguir subiendo, empujada por el nearshoring y por una migración interna que llena parques industriales y fraccionamientos enteros. El anuncio de que se agregará en todo el sexenio alrededor de 29 mil MW de nueva capacidad al sistema eléctrico nacional habla de un esfuerzo grande, pero también de la magnitud del rezago acumulado.

El Sauz II, Salamanca, Villa de Reyes y los proyectos que vienen no solo tienen que encender turbinas. Tienen que sostener la promesa de que México será un destino confiable para la industria que huye de Asia, un país capaz de alojar fábricas y centros de datos sin colapsar su red eléctrica todos los veranos. Y, al mismo tiempo, cargar con la presión internacional de reducir emisiones y mover su matriz hacia fuentes menos contaminantes en un plazo que básicamente no es negociable al estar en acuerdos climáticos ya firmados.

Lo que viene para la CFE es una década en la que cada inauguración como la de El Sauz II servirá para enviar un mensaje de control y orden. Mientras tanto, la planificación seguirá registrando, con lenguaje frío, si la empresa logró achicar la distancia entre lo prometido y lo posible. La pregunta es cuánto tiempo se mantendrá al sistema así, en el límite de su propia capacidad eléctrica.



FENTANILO



COMERCIO DE MUERTE Y ABANDONO

Corrupción y
química barata:
la mezcla que
volvió al país
taller, mercado
y víctima de
una crisis
compartida.



México dejó de ser solo el pasillo del fentanilo para convertirse en taller, mercado y cementerio gracias a una sustancia que condensa el fracaso compartido de las políticas de drogas de América del Norte. En la misma franja donde durante décadas circularon marihuana, heroína y cocaína rumbo a Estados Unidos, hoy se mueven gramos de polvo que pesan menos que una moneda, pero que sostienen negocios billonarios, multiplican sobredosis y empiezan a vaciar talleres, fábricas y oficinas a ambos lados de la frontera.

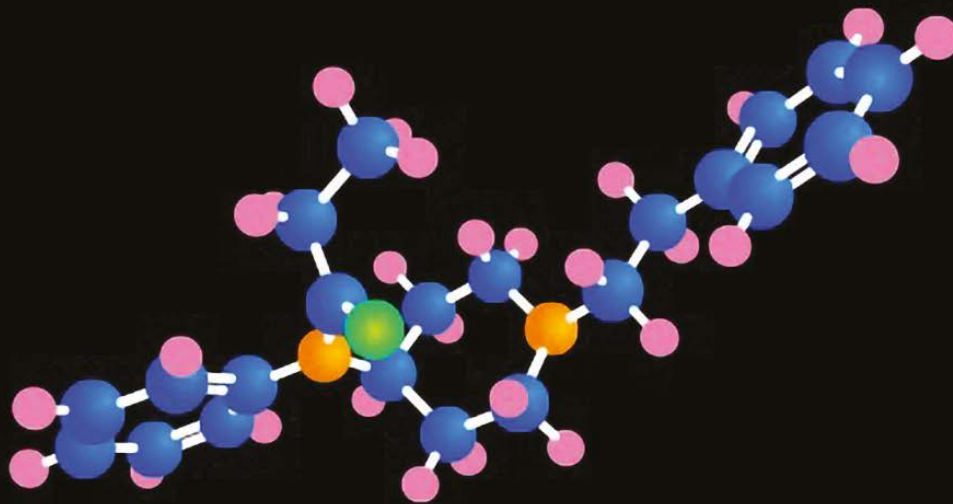
De corredor a mercado: el giro mexicano

Durante años, la versión oficial se repitió era que México no tenía un problema serio de fentanilo porque la droga solo “pasaba” rumbo a Estados Unidos. Esa afirmación es ya, actualmente, insostenible debido a la evidencia acumulada por organismos internacionales, centros de tratamiento y hospitales públicos. El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la UNODC apunta que, mientras Estados Unidos y Canadá registran una caída en las muertes por sobredosis vinculadas al fentanilo, en México crece el número de personas

que ingresan a tratamiento por consumo de opioides sintéticos. La misma ONU subraya que el país se encuentra en una “zona de expansión” de drogas sintéticas, donde aumenta la disponibilidad de sustancias de alto poder con poco conocimiento entre usuarios y poca capacidad del sistema de salud para responder.

En los últimos años, programas de tratamiento en entidades fronterizas y metropolitanas han reportado un aumento notable de pacientes que consumen fentanilo solo o mezclado con otras drogas, muchas veces sin saberlo. En clínicas públicas, médicos de guardia se encuentran con intoxicaciones que no responden a los protocolos habituales porque la potencia del opioide exige dosis más altas de antagonistas como la naloxona y una atención prolongada.

El salto de corredor a mercado no se dio por azar, sino como efecto de tres procesos: la relocalización de la producción hacia México tras el endurecimiento de controles en China, la saturación relativa del mercado estadounidense de heroína tradicional, y la decisión de los cárteles de “abrir” plazas locales con una mercancía barata de producir y fácil de ocultar.



¿CÓMO SE FABRICA?

QUÍMICA, IMPROVISACIÓN Y ESCALA

El fentanilo es un opioide sintético desarrollado en los años sesenta para uso médico, con una potencia decenas de veces mayor que la morfina. En el mundo legal, se utiliza en parches transdérmicos y soluciones inyectables supervisadas; en el circuito clandestino, esa misma característica se convierte en ventaja criminal: pequeñas cantidades generan miles de dosis.

Tras la presión diplomática de Estados Unidos, China incorporó varias formas de fentanilo y sus precursores a listas de sustancias controladas a partir de 2019, lo que obligó a modificar la cadena de producción. En lugar de recibir el opioide ya terminado, los grupos mexicanos comenzaron a importar precursores y “pre-precursores” desde China e India, muchas veces camuflados como

insumos químicos legítimos para la industria farmacéutica, textil o agroquímica.

Los laboratorios clandestinos que procesan estas sustancias no se parecen a instalaciones farmacéuticas de alta tecnología; son bodegas, casas de seguridad o construcciones rústicas donde se combinan reactivos siguiendo recetas que circulan en foros cerrados, aplicaciones de mensajería y contactos con proveedores asiáticos. El nivel de sofisticación varía: desde cocinas improvisadas donde se produce fentanilo en polvo que luego se corta con lactosa u otros rellenos, hasta espacios con equipos capaces de fabricar miles de tabletas por hora con un aspecto casi idéntico al de medicamentos legales.

Un rasgo central de este modelo

industrial es su flexibilidad. Cuando una sustancia entra a listas de control internacional, aparecen “análogos” químicos que eluden la regulación por unos meses o años, mientras los marcos legales se actualizan. Esta carrera entre regulación y síntesis permite a las organizaciones criminales moverse con rapidez, cerrar un laboratorio en un estado y abrir otro en una entidad federativa distinta, o exportar conocimiento técnico a grupos en Centroamérica y el Caribe.

PUERTOS, CARRETERAS Y FRONTERA: LA RUTA HACIA EL NORTE

Para que el polvo llegue a la mesa de un consumidor en Ohio, Pensilvania o Baja California, antes debe cruzar una serie de filtros físicos y políticos que ponen a prueba la capacidad de corrupción del negocio. Los precursores viajan en contenedores desde puertos chinos e indios hacia terminales marítimas mexicanas del Pacífico y, en menor medida, del Golfo.



Puertos como Manzanillo o Lázaro Cárdenas han sido señalados por autoridades y especialistas como puntos críticos donde la revisión de contenedores resulta insuficiente frente al volumen comercial que reciben. En 2023, México lanzó junto con la UNODC un Programa de Control de Contenedores para mejorar la supervisión en terminales marítimas, dentro del Entendimiento Bicentenario con Estados Unidos, reconociendo que la cadena logística era un eslabón vulnerable ante el

tráfico de químicos.

Una vez en tierra, los cargamentos se fragmentan y se trasladan a laboratorios situados en estados con presencia consolidada de organizaciones criminales y acceso razonable a infraestructuras de transporte. Tras el procesamiento, el fentanilo se moviliza hacia la frontera mediante trailers de carga, vehículos particulares y “mulas” que lo ocultan en compartimentos, llantas, tanques o incluso en el cuerpo, aprovechando su alta

concentración.

Al llegar a los puertos de entrada de Estados Unidos, la sustancia se dispersa a través de redes que combinan viejas estructuras de distribución con nuevas dinámicas digitales. La mayor parte del fentanilo incautado por autoridades estadounidenses en su frontera sur se atribuye a grupos mexicanos, lo que confirma la centralidad del país en la etapa de producción y primer nivel de distribución.



MERCADO INTERNO: FENTANILO EN CALLES MEXICANAS

Mientras las miradas se concentran en el flujo hacia Estados Unidos, el mercado interno mexicano avanza en silencio. La UNODC y académicos de nuestro país coinciden en que la presencia de drogas sintéticas se ha vuelto un problema compartido entre México y su vecino del norte, con aumentos recientes en los ingresos a tratamiento por metanfetamina y, en menor medida, fentanilo.

En ciudades fronterizas, el opioide se mezcla con heroína para “potenciar” el efecto, lo que incrementa la probabilidad de sobredosis en usuarios que mantienen sus dosis habituales sin saber que consumen una droga mucho más fuerte. En corredores turísticos, se han documentado casos de pastillas vendidas como ansiolíticos o analgésicos que contienen fentanilo en proporciones aleatorias.

Esta expansión no responde a una demanda espontánea, sino a una estrategia comercial: ofrecer un producto barato de producir, de fácil transporte y de alto poder adictivo. El usuario final rara vez tiene información confiable sobre lo que está comprando; de ahí que la tasa de sobredosis accidentales sea tan alta y que los sistemas de salud encuentren cuadros clínicos difíciles de manejar.





CORRUPCIÓN: EL LUBRICANTE DEL NEGOCIO

El fentanilo no se mueve solo por la geografía, también circula por la burocracia. Contenedores que no se revisan, permisos que se agilizan, inspecciones que nunca llegan: cada omisión abre un espacio donde el dinero del narcotráfico compra lealtades o, al menos, indiferencia. El valor del mercado minorista de drogas en Estados Unidos se calculaba ya en 146 mil millones de dólares en 2016, de acuerdo con estimaciones retomadas por la UNODC, mientras que en México el tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína generaba más de 12 mil millones anuales. En un entorno así, una cadena de suministro basada en kilos de un polvo de alta potencia ofrece márgenes de ganancia enormes y reduce los riesgos logísticos frente a cargas voluminosas que

ofrecía, digamos, la cocaína.

El control de precursores químicos constituye un terreno particularmente propicio para la infiltración criminal. Empresas fachada, facturas alteradas y uso de rutas legales permiten que sustancias de laboratorio crucen fronteras camufladas como insumos industriales, dificultando la tarea de autoridades aduaneras con recursos limitados. Cuando los organismos nacionales e internacionales actualizan sus listados, los actores ilícitos ya han identificado moléculas cercanas que quedan fuera del radar por un tiempo.

La corrupción no se limita a las aduanas. Abarca policías locales que brindan protección a puntos de venta, gobiernos municipales que miran a otro lado y sistemas de justicia que avanzan más rápido contra consumidores que contra operadores financieros del negocio. Esa asimetría alimenta un entorno donde la persecución se concentra en eslabones débiles mientras directivos de empresas químicas, lavadores de dinero y enlaces internacionales mantienen su cómodo margen de maniobra.

POLÍTICAS EN CORTO: CONTENEDORES, PRECURSORES Y COOPERACIÓN

Frente a este panorama, México y Estados Unidos han intentado ajustar sus herramientas. El Programa de Control de Contenedores, impulsado en 2023 con apoyo de la UNODC, busca fortalecer las “Unidades Conjuntas de Control Portuario” para revisar cargamentos sospechosos y reducir el uso de contenedores para transportar drogas, armas y otros bienes ilícitos.

El Entendimiento Bicentenario incluye compromisos para mejorar el intercambio de información sobre precursores, capacitar a autoridades portuarias y aduaneras, y desarrollar mecanismos comunes de supervisión. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha llevado a tribunales a empresas chinas acusadas de suministrar precursores a cárteles mexicanos, lo que evidencia la dimensión transnacional de la cadena.



Cadena del fentanilo

en América del Norte

Eslabón	 México	 Estados Unidos	 Actores externos
PRECURSORES QUÍMICOS	<ul style="list-style-type: none">• Importación de China e India, empresas fachada y puertos con control limitado.	<ul style="list-style-type: none">• Regulación estricta de sustancias controladas, vigilancia a importaciones directas.	<ul style="list-style-type: none">• Proveedores químicos en Asia, cambios regulatorios en China e India.
 PRODUCCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Laboratorios clandestinos con distintos niveles de sofisticación; liderazgo de cárteles mexicanos.	<ul style="list-style-type: none">• Producción menor, asociada a laboratorios dispersos y mezcla con opioides prescritos.	<ul style="list-style-type: none">• Difusión de “recetas” y venta de equipos en mercados digitales.
 DISTRIBUCIÓN MAYORISTA	<ul style="list-style-type: none">• Rutas históricas de narcotráfico hacia la frontera, control territorial de organizaciones.	<ul style="list-style-type: none">• Redes interestatales, pandillas locales, uso de mercados en línea.	<ul style="list-style-type: none">• Intermediarios logísticos y financieros en varios países.
 MERCADO MINORISTA	<ul style="list-style-type: none">• Crecimiento en ciudades fronterizas y turísticas; mezcla con otras drogas.	<ul style="list-style-type: none">• Crisis masiva de sobredosis; fuerte presencia en mercados urbanos y rurales.	<ul style="list-style-type: none">• Plataformas digitales que facilitan contacto vendedor-comprador.

Fuente: Servicio Electoral (Servel)

Sin embargo, estas acciones conviven con límites claros. La economía global de bienes y servicios dificulta revisar a fondo el enorme flujo de contenedores, sobre todo en países con capacidades institucionales desiguales. Cada nueva regulación genera también nuevos incentivos para que la industria ilícita explore rutas alternativas: puertos más pequeños, países de tránsito en Centroamérica o envíos fragmentados a través de correo y mensajería.

DAÑOS EN SALUD: CUERPOS AL LÍMITE

La crisis de opioides ha dejado una estela de muertes en Estados Unidos que supera las de muchas guerras, con más de 645 mil fallecimientos por sobredosis entre 1999 y 2021 y picos superiores a las 100 mil muertes anuales en años recientes, dominados por el fentanilo y otros opioides sintéticos. Aunque las cifras más recientes comienzan a mostrar una disminución relativa en decesos vinculados al fentanilo, el número absoluto sigue siendo alto y sus efectos se acumulan en comunidades enteras.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han documentado el enorme costo económico del trastorno por consumo de opioides y las sobredosis: pérdidas por productividad, gastos médicos, atención de emergencias y costos asociados al sistema de justicia. Estudios citados por los CDC estiman que el valor de vidas perdidas y los costos de atención asociados a esta crisis llegaron a niveles que superan los cientos de miles de millones de dólares anuales.

México, por su parte, aún carece de un sistema de registros preciso que permita dimensionar con la misma claridad la mortalidad y morbilidad por fentanilo. Lo que sí se observa es un incremento en los ingresos a tratamiento por

consumo de opioides sintéticos y otras drogas de laboratorio, en un sistema de salud que arrastra rezagos de recursos humanos, medicamentos y unidades especializadas. Esta combinación anticipa un escenario donde una sustancia extremadamente potente se abre paso en barrios con hospitales saturados y con escaso acceso a servicios de reducción de daños.

La sobredosis no es el único daño. El consumo crónico genera alteraciones severas en el sistema respiratorio, daños cardiovasculares, trastornos en la respuesta al dolor y deterioro cognitivo que afecta la capacidad para trabajar, estudiar y sostener vínculos personales. En contextos de pobreza, estos efectos se traducen en un círculo vicioso: la adicción empuja a la informalidad o al desempleo, y la precariedad alimenta el consumo.





**GOLPE A LA PLANTA LABORAL:
FÁBRICAS Y OFICINAS
DIEZMADAS**

Durante años se insistió en que la crisis de opioides afectaba sobre todo a personas “fuera” del mercado laboral; investigaciones recientes han desmontado esa idea. Un estudio sobre pérdida de vidas y productividad en Estados Unidos y Canadá muestra que una parte significativa de las muertes y trastornos por consumo de opioides se concentra en población en edad productiva, con consecuencias directas sobre la fuerza laboral y el crecimiento económico.

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca estimó que el costo total de la crisis de opioides para Estados Unidos alcanzó varios billones de dólares, al considerar no solo el gasto






sanitario y de impartición de justicia, sino también la productividad perdida. Dentro de ese cálculo, la pérdida de productividad laboral por sí sola se ubicó en torno a los 107 mil millones de dólares, lo que da una idea de la magnitud del impacto en empresas, gobiernos locales y comunidades.

A nivel micro, el efecto se ve en plantas industriales obligadas a operar con menos personal, empresas de servicios que lidian con ausentismo, accidentes y rotación, y comunidades rurales donde buena parte de la población en edad de trabajar arrastra algún grado de dependencia a los opioides. Un informe reciente de Quest Diagnostics documentó un aumento de 400% en positivos por fentanilo en pruebas aleatorias aplicadas a empleados estadounidenses, con la advertencia

de que este consumo incrementa el riesgo de deterioro durante la jornada, junto con la mayor probabilidad de accidentes y sobredosis en el lugar de trabajo.

En México, todavía no existen estudios de impacto laboral tan detallados sobre el fentanilo, pero sí señales tempranas. El crecimiento en el uso de drogas sintéticas, en particular metanfetamina, ya impacta la productividad en sectores donde se combinan jornadas largas, salarios bajos y escaso acceso a servicios de salud mental y adicciones. La llegada del fentanilo a esos mismos territorios puede agravar una situación en la que el tejido productivo es frágil y la informalidad absorbe a quienes pierden su lugar en el empleo formal por problemas de salud.

Impacto laboral de la crisis de opioides

Dimensión	 Estados Unidos	 México
Pérdida de productividad estimada	<ul style="list-style-type: none">Alrededor de 107 mil millones de dólares por año asociados a la crisis de opioides.	<ul style="list-style-type: none">Sin estimación integral, pero con indicios de afectación en regiones con alta presencia de drogas sintéticas.
Población afectada 	<ul style="list-style-type: none">Alta incidencia en adultos en edad productiva; caídas en participación laboral en estados con crisis aguda.	<ul style="list-style-type: none">Aumento de pacientes en tratamiento por drogas sintéticas, muchos en edad de trabajar.
Ámbitos laborales 	<ul style="list-style-type: none">Industria, construcción, servicios y sectores rurales con alta precariedad.	<ul style="list-style-type: none">Sectores de bajo salario, empleo informal y cadenas productivas regionales vulnerables.
Ámbitos laborales 	<ul style="list-style-type: none">Industria, construcción, servicios y sectores rurales con alta precariedad.	<ul style="list-style-type: none">Sectores de bajo salario, empleo informal y cadenas productivas regionales

Fuente: Institutos Nacionales de Salud (NIH), León García et al 2023

EL COMBATE Y SUS LÍMITES: LO QUE LA FUERZA NO LOGRA

La tentación de responder al fentanilo con más fuerza bruta es grande. Redadas espectaculares, decomisos de laboratorio y presencia militar generan imágenes poderosas, pero rara vez alcanzan a desarticular la red financiera y logística que sostiene el negocio.

El fentanilo, por su potencia y flexibilidad, desnuda el límite de las estrategias centradas en decomisos. Aun con aseguramientos récord de toneladas de sustancias y precursores, el mercado se adapta: se reduce la pureza, se modifica la mezcla, se diversifican proveedores. La propia UNODC ha señalado que la disminución reciente en muertes por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos se debe tanto a decomisos como a la expansión de tratamientos y a la distribución más amplia de naloxona, es decir, a medidas de salud pública.

En México, la combinación de carencias en el sistema de salud y la ausencia de políticas robustas de reducción de daños crea un vacío que el mercado ilícito aprovecha. La falta de programas amplios de tratamiento con sustitutos opioides, la escasez de naloxona en espacios comunitarios y la criminalización del usuario impiden construir respuestas que reduzcan la mortalidad sin depender solo de la fuerza.



MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: UN PROBLEMA COMPARTIDO

El fentanilo ha borrado la frontera entre “productor” y “consumidor”. La producción se realiza en México con insumos importados de Asia; parte de la síntesis puede ocurrir en laboratorios dentro de Estados Unidos; el consumo golpea a comunidades de ambos países; y los beneficios económicos se expanden a redes financieras que rebasan la región.

Este circuito obliga a replantear el enfoque tradicional de la cooperación antidrogas. Más allá de los decomisos, la coordinación debería apuntar a tres frentes:

vigilancia conjunta de precursores y carga contenerizada, fortalecimiento de sistemas de salud y tratamiento, y combate a las estructuras financieras que lavan las ganancias del fentanilo. Al mismo tiempo, las autoridades necesitan atender los efectos sobre la fuerza laboral, entendiendo que la crisis ya no se ubica solo en callejones y “escenas de consumo”, sino también en líneas de producción, oficinas y servicios esenciales.

En esa región donde se cruzan químicos asiáticos, laboratorios clandestinos mexicanos, consumidores estadounidenses y cadenas de valor globales, el fentanilo funciona como

termómetro de una época: un producto ligero, barato, anónimo y letal que prospera en huecos regulatorios, desigualdades sociales y sistemas de salud fracturados. Su expansión, y el impacto que ya se siente en los hospitales y en la planta laboral, marca una urgencia: salir del lugar cómodo donde se culpa solo al vecino y enfrentar que, en este mapa, nadie es solo víctima ni solo verdugo.



NEARSHORING EN PAUSA

PROMESA INDUSTRIAL FRENTE A LOS LÍMITES DEL ESTADO MEXICANO



La relocalización industrial **avanza con cautela en México;** la infraestructura, energía y un **Estado fragmentado** enfrían una promesa industrial aún inconclusa.

Durante meses, el nearshoring fue pronunciado como una promesa que parecía no requerir demasiadas explicaciones. Bastaba nombrarlo para invocar crecimiento, inversión y un nuevo ciclo industrial para México. La relocalización de cadenas productivas, empujada por la pandemia y por la disputa comercial entre Estados Unidos y China, colocó al país en el centro de una narrativa optimista que hablaba de ventaja geográfica, oportunidad histórica y destino inevitable.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa narrativa empezó a mostrar fisuras. Los anuncios no siempre se tradujeron en obras, la infraestructura comenzó a marcar límites y la velocidad esperada se transformó en cautela. Hoy, más que celebrar el nearshoring, el reto es mirarlo de frente, no como consigna, sino como un proceso incompleto, atravesado por decisiones políticas, restricciones materiales y una competencia regional que no espera.

LA ALQUIMIA PENDIENTE

El nearshoring fue presentado como una oportunidad histórica para la economía mexicana, una especie de revancha industrial tras décadas de apertura desigual y

promesas de integración productiva incompleta. Hoy, cuando el entusiasmo inicial empieza a enfriarse y los anuncios conviven con proyectos detenidos, revisar esta relocalización industrial sin triunfalismo resulta inevitable. No para declarar su fracaso, sino para medir hasta dónde el país ha podido convertir una coyuntura geopolítica excepcional en una estrategia real de desarrollo. En un contexto latinoamericano marcado por una competencia silenciosa entre países y por un Estados Unidos que redefine su política industrial con mano firme, el tema debe abordarse sin estridencia, pero sin ingenuidad, como una promesa que aún respira, aunque ya muestra señales de fatiga.



DE LA EUFORIA AL AJUSTE DE EXPECTATIVAS

Durante los meses posteriores a la pandemia, el nearshoring se volvió una palabra omnipresente. Aparecía en discursos oficiales, presentaciones empresariales y titulares económicos. México, se decía, estaba frente a una oportunidad que no volvería a repetirse. Se relocalizarían las cadenas productivas desde Asia hacia América del Norte, se aprovecharía la cercanía con Estados Unidos y el marco del T-MEC y se recuperaría una vocación industrial erosionada durante décadas.

La narrativa era simple y seductora. Empresas que buscaban reducir riesgos logísticos, acortar tiempos de entrega y blindarse ante tensiones geopolíticas encontrarían en México un destino natural. Mano de obra disponible, costos competitivos, experiencia manufacturera acumulada. Todo parecía alinearse.

INVERSIONES QUE ESPERAN

Y DECISIONES QUE NO LLEGAN

A finales de 2025 el relato ya no fluye con la misma facilidad. Los anuncios siguen ahí, pero conviven con silencios incómodos. Proyectos que se presentaron con entusiasmo avanzan más lento de lo previsto o entran en una fase de espera indefinida. La relocalización existe, pero no en la escala ni con la velocidad que se prometió.

Los datos de inversión extranjera directa confirman que hay flujos asociados al nearshoring, pero concentrados en sectores específicos, automotriz, electrónico, logístico, y, sobre todo, en la ampliación de plantas ya existentes. La inversión greenfield, aquella que crea nuevas instalaciones desde cero, aparece con mayor cautela. Aquí algo no termina de encajar.

No se trata de un retroceso abrupto, sino de un ajuste de expectativas. Las empresas no se van, pero tampoco llegan en estampida. Observan, comparan, esperan. Y ese compás de espera dice más que cualquier comunicado.

En más de una mesa de negociación el guion se repite. Delegaciones estatales presentan terrenos, incentivos fiscales y calendarios optimistas. Las empresas

escuchan, toman notas y hacen las mismas preguntas, ¿cuándo estará lista la energía?, ¿de dónde saldrá el agua?, ¿quién responde si algo falla? La reunión termina sin ruptura, pero sin compromiso. No hay negativa explícita, solo una postergación elegante. El proyecto queda “en evaluación”, una categoría que no aparece en comunicados oficiales, pero que en la práctica congela decisiones durante meses. El nearshoring no se cae, se enfría.

EL CUELLO DE BOTELLA QUE NADIE QUISO VER

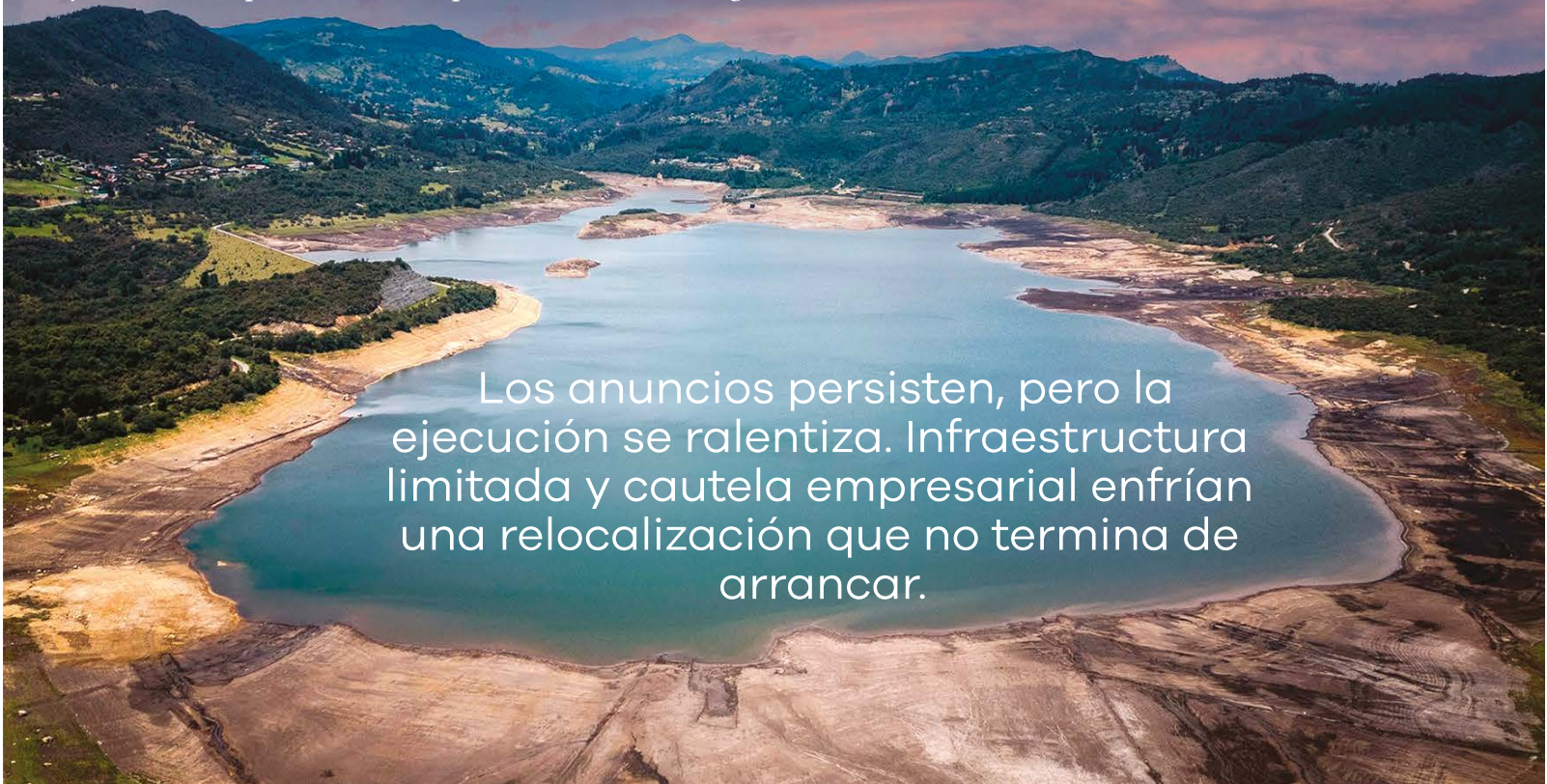
La infraestructura se convirtió en el filtro decisivo del nearshoring. No como un concepto abstracto, sino como una suma de límites concretos, como electricidad que no alcanza, redes de transmisión saturadas, disponibilidad de agua cada vez más restringida, acceso irregular al gas natural, carreteras y cruces fronterizos bajo presión constante.

Durante años, el debate económico asumió que la infraestructura industrial estaba ahí, lista para escalar. El nearshoring mostró lo contrario.

Incluso en los estados con mayor tradición manufacturera, los márgenes son estrechos. La capacidad instalada resiste, pero no sobra.

El norte y el Bajío concentran ventajas relativas, pero también exhiben saturación. Subestaciones eléctricas que operan al límite, parques industriales que crecen más rápido que los servicios que los alimentan, disputas locales por el uso del agua. En ese escenario, cada nueva inversión debe negociar su viabilidad caso por caso.

El sur y el sureste, por su parte, siguen cargando un rezago estructural. Los esfuerzos de desarrollo no han logrado traducirse en condiciones industriales comparables. Para el nearshoring manufacturero de gran escala, esas regiones aún no entran en el radar de decisión de la mayoría de las empresas globales. No por prejuicio, sino por cálculo. Aquí se rompe el relato. El país que aspiraba a absorber una relocalización masiva enfrenta límites físicos que no se resuelven con discursos ni con anuncios aislados.



Los anuncios persisten, pero la ejecución se ralentiza. Infraestructura limitada y cautela empresarial enfrían una relocalización que no termina de arrancar.

DEMANDA

QUE AVANZA MÁS RÁPIDO QUE LAS DECISIONES



La incertidumbre energética pesa tanto como la escasez. Sin plazos claros, los compromisos de largo plazo se enfrían antes de concretarse.



La energía merece un capítulo propio, aunque rara vez lo tenga. La discusión suele reducirse a capacidad instalada y costos, pero el problema es más profundo. La demanda industrial crece más rápido que las decisiones estratégicas y la transición energética avanza con ritmos distintos según el territorio. Para las empresas, la incertidumbre pesa tanto como la escasez. No saber si habrá suministro suficiente dentro de cinco o diez años afecta decisiones que no se toman a corto plazo. El nearshoring requiere horizontes largos; la política energética mexicana aún opera con plazos cortos. Esa disonancia no detona crisis inmediatas, pero sí frena compromisos de fondo.

LA OPORTUNIDAD SE ADMINISTRA POR PARTES

A esta ecuación se suma un problema menos visible, pero

igual de determinante, que es la fragmentación del Estado mexicano frente al nearshoring. No existe una política industrial articulada que ordene prioridades, territorios y capacidades. La relocalización avanza, en buena medida, empujada por inercias de mercado y por esfuerzos estatales aislados.

Gobernadores compiten entre sí por los mismos proyectos, ofrecen incentivos fiscales, facilitan permisos y prometen infraestructura que no siempre controlan. Municipios negocian usos de suelo y acceso a servicios sin una visión de largo plazo. La federación, mientras tanto, aparece como árbitro distante, más reactivo que conductor.

Esta fragmentación también tiene un costo político que pocos quieren asumir. Reconocer que no hay condiciones implica decir que la oportunidad existe, pero no puede

ejecutarse aún. En un entorno donde el nearshoring fue vendido como éxito inevitable, admitir límites se vuelve impopular. Así, el Estado no decide, difiere. La coordinación se pospone, las definiciones estratégicas se diluyen y el proceso queda atrapado entre anuncios ambiciosos y capacidades incompletas.

Esta dispersión genera incentivos contradictorios. Estados que bajan estándares para atraer inversión, otros que prometen recursos hídricos que ya están comprometidos, agencias que aceleran autorizaciones sin resolver cuellos estructurales. El nearshoring se administra así, por partes, sin una narrativa estatal coherente que articule desarrollo industrial, política energética y ordenamiento territorial. No es ausencia total del Estado. Es una presencia fragmentada, incapaz de convertir una coyuntura favorable en estrategia.

LA GEOGRAFÍA DESIGUAL



DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL

La inversión se concentra donde ya había industria y amplía brechas regionales, abriendo un dilema político que nadie quiere resolver.

El nearshoring no solo reconfigura cadenas productivas; también redibuja mapas internos. Los estados que ya contaban con infraestructura, capital humano y redes logísticas captan la mayor parte del interés. Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro aparecen una y otra vez en los registros de inversión anunciada.

El patrón es claro y poco sorpresivo. Donde ya había industria, llega más industria. Donde no, el proceso sigue siendo lento y fragmentado. El nearshoring, lejos de equilibrar el desarrollo territorial, tiende a profundizar asimetrías.

Esto coloca un dilema político incómodo, ¿se va a aceptar una concentración industrial que acelera el crecimiento nacional, aunque amplíe brechas regionales?, ¿o conviene intervenir para redistribuir inversiones, aun a costa de perder atractivo frente a otros países? La respuesta no es técnica; es política. Y hasta ahora ha sido evasiva.

SEGURIDAD, REGLAS Y LA LÓGICA DEL RIESGO

En los tableros de decisión corporativa, la seguridad pública y la certeza jurídica pesan tanto como los costos

laborales. No aparecen en discursos promocionales, pero determinan tiempos y escalas.

La percepción de inseguridad en corredores industriales, el impacto de las extorsiones, la vulnerabilidad de las cadenas logísticas y la incertidumbre regulatoria no cancelan inversiones de inmediato, pero las vuelven más prudentes. Menos capital comprometido de golpe, más fases piloto, más cláusulas de salida.

El nearshoring avanza así, con el freno puesto. No se trata de una estampida que huye, sino de una marcha cautelosa. El problema es que otros países de la región, con marcos regulatorios más previsibles o políticas industriales más agresivas, compiten por las mismas decisiones. Aquí el tiempo empieza a jugar en contra.

MÉXICO FRENTE A LA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL ESTADOUNIDENSE

Mientras México debate si debe o no contar con una política industrial explícita, Estados Unidos dejó atrás esa

discusión. Subsidios, estímulos fiscales, compras gubernamentales estratégicas y condiciones claras para sectores prioritarios forman parte de su nueva arquitectura económica.

El contraste es evidente. De un lado, un socio comercial que define sectores, protege cadenas críticas y empuja la relocalización con recursos públicos. Del otro, un país que confía en la ventaja geográfica y en el mercado como motores casi exclusivos.

Esa asimetría encierra un riesgo: que México termine funcionando solo como plataforma de ensamblaje, capturando empleo, pero no innovación; producción, pero no diseño; volumen, pero no valor agregado.



LO QUE SÍ SE MUEVE

Y LO QUE NO EN LA CADENA DE VALOR

México se integra a la producción, pero no asciende; aunque la manufactura llega, el diseño, la decisión y el valor se quedan fuera.

La relocalización productiva que llega a México no es homogénea. En muchos casos se trata de procesos intermedios, manufactura estandarizada y logística ampliada. Las decisiones estratégicas, el diseño de productos, la investigación y el control de la propiedad intelectual permanecen fuera.

Las plantas se expanden, pero los centros de decisión no se trasladan. Se generan empleos, pero no siempre capacidades nuevas. El país se integra a la cadena, aunque no necesariamente asciende en ella.

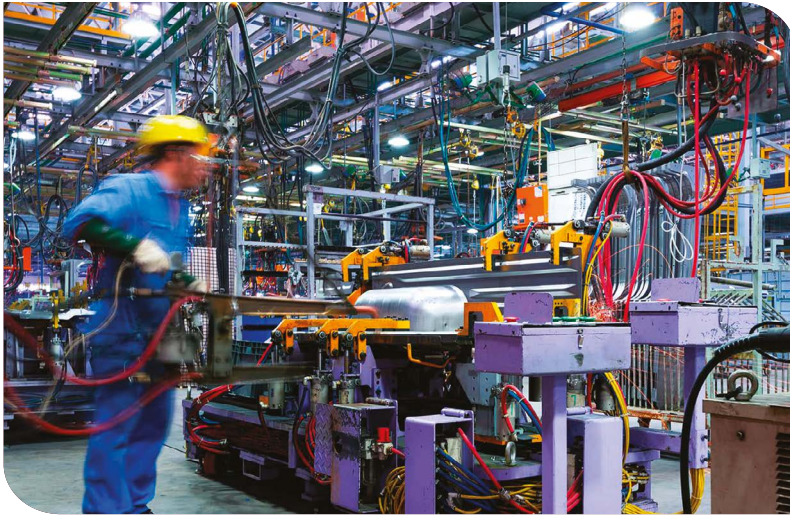
Este patrón no es nuevo, pero el nearshoring lo hace más visible. La pregunta no es si México participa, sino en qué tramo de la cadena se queda. Y esa respuesta depende menos del mercado que de una política deliberada de desarrollo productivo que aún no aparece.

TRABAJO, SINDICATOS Y LA TENSIÓN QUE VIENE

El empleo es uno de los argumentos más repetidos del nearshoring. Sin embargo, detrás de las cifras hay tensiones que empiezan a emerger. Alta rotación, presión sobre salarios, escasez de personal técnico calificado y procesos de capacitación que no avanzan al mismo ritmo que la inversión. La reforma laboral y los nuevos esquemas sindicales introducen una variable adicional. Para algunas empresas, la reorganización sindical es vista como un riesgo operativo; para otras, como un costo que debe administrarse con cautela. El resultado es un mercado laboral más dinámico, pero también más inestable.

Más empleo no garantiza movilidad social ni transformación productiva. Sin una estrategia clara de capacitación, certificación técnica y mejora salarial, el trabajo industrial corre el riesgo de convertirse en una promesa agotada. El nearshoring puede generar puestos, pero también consolidar trayectorias laborales planas, con escaso margen de ascenso. En ese escenario, el empleo deja de ser un motor de desarrollo y se convierte en un mero argumento defensivo, suficiente para justificar políticas, pero insuficiente para cambiar realidades. Esa tensión, tarde o temprano, deja de ser económica y se vuelve política.





LA COMPETENCIA SILENCIOSA EN AMÉRICA LATINA

México no compite solo. Países como Brasil, Colombia, Costa Rica y República Dominicana ajustan marcos regulatorios, ofrecen incentivos específicos y buscan insertarse en nichos de la relocalización productiva.

No se trata de desbancar a México como socio principal de Estados Unidos, sino de capturar fragmentos de cadenas, servicios especializados y procesos de mayor contenido tecnológico. La competencia no es frontal ni ruidosa. Es técnica y persistente.

En ese tablero, la pausa del nearshoring mexicano se vuelve una ventana para otros. Cada proyecto que se retrasa aquí se evalúa en otro lado.

PROMESAS QUE AÚN NO CUAJAN

Uno de los grandes silencios del debate es el impacto fiscal real del nearshoring. Los anuncios hablan de empleo y crecimiento, pero los efectos sobre la recaudación, la calidad salarial y los encadenamientos productivos siguen siendo desiguales.

Muchos empleos creados reproducen esquemas previos: salarios contenidos, alta rotación, bajo poder de negociación. La mejora existe, pero no en la magnitud que justificaría el entusiasmo inicial. El riesgo no es menor. Si el nearshoring se traduce solo en más de lo mismo, su legitimidad política se erosiona rápido.

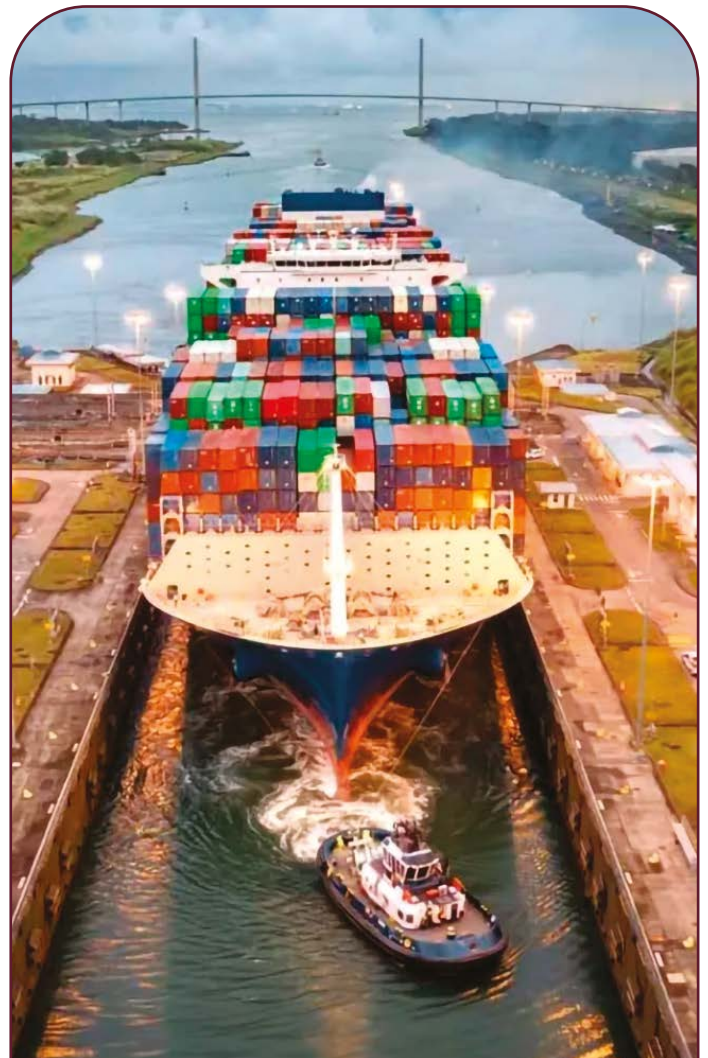
ESCENARIOS QUE NO TRANQUILIZAN

Hacia 2026, el nearshoring mexicano se mueve entre tres trayectorias posibles: una aceleración condicionada a la resolución de cuellos de botella críticos; un estancamiento prolongado, donde los anuncios superan a los hechos; o una redirección, en la que México captura solo segmentos de bajo riesgo mientras otros países avanzan en fases de mayor valor.

Ninguno de esos escenarios se define únicamente por el mercado. Todos dependen de decisiones políticas que aún no terminan de tomarse.

El nearshoring no ha muerto. Tampoco despegó. Está suspendido en una zona incómoda, donde la oportunidad sigue abierta, pero el reloj corre.

Y la pregunta ya no es si México puede beneficiarse de esta relocalización industrial, sino cuánto está dispuesto a cambiar para que eso ocurra antes de que la ventana se cierre sin hacer ruido.



Mientras otros países avanzan, México duda. la ventana sigue abierta, pero la pausa erosiona una oportunidad que no espera.

EL MUNDIAL 2026

COMO ESCENARIO DE PODER



El sorteo exhibió cómo el fútbol se cruza con diplomacia, migración, seguridad y ambiciones presidenciales.

El sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington fue mucho más que el arranque formal del torneo: funcionó como un gran escenario de diplomacia futbolera, cálculo político y autopromoción, con Donald Trump intentando convertir la ceremonia en un culto a su figura, Claudia Sheinbaum usando el evento para proyectar cooperación y desarrollo compartido, y Mark Carney manteniendo un perfil técnico y sobrio. Al mismo tiempo, el boicot de Irán por el rechazo de visas a su delegación, las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe que elevan la tensión con Venezuela y el endurecimiento contra migrantes chocaron con el discurso oficial de unidad y fiesta global.

ESCENOGRAFÍA DEL SORTEO Y LO POLÍTICO

El sorteo se celebró en el Kennedy Center, en Washington, con la presencia estelar de Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, mandatarios de los tres países sede del Mundial 2026. La postal de los tres en el escenario, sacando de una urna las tarjetas de sus propias selecciones —Estados Unidos al grupo D, México al grupo A y Canadá al grupo B— fue tan simbólica como cuidadosamente diseñada: un mensaje de aparente unidad norteamericana en un momento de fricciones comerciales y diplomáticas.

Para la FIFA, encabezada por Gianni Infantino, el sorteo fue una oportunidad perfecta para mostrar estabilidad en la región que albergará el Mundial más grande de la historia, con 48 equipos y una infraestructura compartida sin precedentes. Pero esa imagen de armonía escondía tensiones muy reales: disputas sobre la modernización del acuerdo

TRUMP: CULTO PERSONAL, “PREMIO DE LA PAZ” Y MANO DURA

Para Donald Trump, el sorteo fue usado como un gigantesco set televisivo personal, donde el fútbol sirvió sobre todo de telón de fondo a su campaña permanente de autopromoción. La cereza en el pastel fue el recién creado “FIFA Peace Prize” que Gianni Infantino le entregó al presidente estadounidense, en un gesto ampliamente criticado por activistas y especialistas en gobernanza deportiva, que lo consideraron una concesión política disfrazada de homenaje deportivo.

Críticos de derechos humanos subrayaron la contradicción de coronar a Trump como referente de “paz” en medio de decisiones militares agresivas y de un discurso abiertamente hostil hacia migrantes y refugiados. Organizaciones civiles también señalaron que este tipo de galardones viola el principio básico de neutralidad política que la propia FIFA asegura defender, y denunciaron que la federación se ha vuelto una plataforma de legitimación para líderes autoritarios o populistas.



La puesta en escena recordó inevitablemente la lógica que Cantinflas retrata en Su Excelencia, cuando el primer ministro de Pepeslavia ordena al de Relaciones Exteriores: “Dele las (condecoraciones) que crea necesarias, si ese hombre es vanidoso, vamos a apabullarlo con honores”. En Washington, Infantino actuó como aquel hombre fuerte solícito: trofeo, medalla y discurso laudatorio, como si el protagonista del evento fuera el inquilino de la Casa Blanca y no las 48 selecciones que disputarán el título. El llamado “premio de la paz” terminó siendo, en los hechos, una fiesta de quinceaños para Donald Trump, diseñada para inflar su ego y amarrar la alianza entre la FIFA y el poder político estadounidense.



SHEINBAUM: FÚTBOL

COOPERACIÓN Y DESARROLLO

Frente al tono personalista de Trump, Claudia Sheinbaum aprovechó el sorteo para insistir en una idea distinta: el fútbol como herramienta de cooperación regional, desarrollo compartido y proyección de México como país anfitrión responsable. Desde días antes había confirmado su asistencia, destacando que México llega a su tercer Mundial como sede con experiencia organizativa y la intención de mostrar su riqueza cultural y turística.

En Washington, la presidenta mexicana buscó colocar tres ejes: México como pilar, no como socio menor, en el proyecto mundialista norteamericano.

El Mundial como palanca para detonar infraestructura, turismo y empleo, enlazando ciudades sede con rutas culturales y proyectos ferroviarios como el Tren Maya.

La seguridad para aficionados y turistas como un esfuerzo civil y coordinado, evitando que el torneo sirva de pretexto para mayor militarización.

Mientras Trump convertía el escenario en extensión de su campaña interna, Sheinbaum apostó por un tono institucional, poniendo por delante al torneo y a los aficionados. Ese contraste refuerza la idea de un México que busca capitalizar el Mundial para atraer inversión y turismo, al tiempo que marca distancia de las políticas más agresivas de Washington en migración y seguridad.



CARNEY:

TECNOCRACIA FRÍA

EN UN ESCENARIO CALIENTE

El primer ministro canadiense, Mark Carney, optó por una posición intermedia: lejos del histrionismo de Trump, pero sin la carga simbólica que arrastra México como país con tradición mundialista. Sus intervenciones giraron en torno a la modernización de infraestructura, la oportunidad de proyectar a Canadá como socio en la transición energética y la relevancia del torneo para la economía digital y el turismo.

Carney se mantuvo en un registro prudente, subrayando la importancia de la coordinación logística y la revisión del marco comercial norteamericano, sin confrontar abiertamente a Trump ni alinearse del todo con las posturas más progresistas de Sheinbaum. Ese equilibrio refleja el papel que Canadá suele asumir: socio confiable, predecible y dispuesto a moderar los extremos de sus vecinos.

EL BOICOT DE IRÁN Y LA CORRECCIÓN SOBRE LAS VISAS

Mientras las cámaras enfocaban a los líderes norteamericanos, otra historia corría en paralelo: la ausencia anunciada de Irán en el propio sorteo. La federación iraní decidió inicialmente boicotear la ceremonia

después de que Estados Unidos negó visas a miembros de su delegación, incluidos directivos de alto nivel, lo que Teherán consideró una medida claramente política.

Reportes sobre la gestión de visas para la fase final del Mundial señalan que Washington ha dejado abierta la puerta a negar visas a integrantes de delegaciones —incluyendo cuerpos técnicos e incluso jugadores— con antecedentes en ciertas estructuras militares de la República Islámica, en particular en unidades asociadas a la Guardia Revolucionaria, bajo el paraguas de su legislación antiterrorista. Entre los nombres que han circulado en medios como ejemplo del impacto potencial de estas políticas figura el delantero Mehdi Taremi, citado como caso que ilustra cómo este tipo de criterios puede alcanzar directamente a futbolistas de élite si se cuestiona su pasado.

Canadá apuesta por la tecnocracia y el equilibrio, mientras el boicot iraní revela el peso político de las visas.

AMENAZAS Y RIESGO PARA PLANTILLAS COMPLETAS

Las señales emitidas por Estados Unidos sobre el escrutinio a miembros de delegaciones con pasado militar elevan el riesgo de que el Mundial se convierta en un laberinto burocrático y político. El criterio no se limita a dirigentes: alcanza a fisioterapeutas, auxiliares, preparadores físicos y, en escenarios extremos, a jugadores que hayan cumplido servicio militar obligatorio o que tengan vínculos con cuerpos considerados sensibles por Washington.

En el caso iraní, el problema es especialmente delicado: buena parte de la población masculina ha pasado por algún tipo de servicio militar, lo que abre la puerta a revisiones caso por caso que podrían traducirse en retrasos, vetos de último minuto o presiones diplomáticas. Si una selección llega a perder a su capitán o a su goleador por una decisión consular, la responsabilidad recaerá tanto en la política exterior estadounidense como en la complacencia de la FIFA ante este tipo de obstáculos.



OPERACIONES DE ESTADOS UNIDOS

EN EL CARIBE Y LA AMENAZA A VENEZUELA

Operaciones militares y redadas migratorias contradicen el discurso de fiesta global que Washington promete al mundo.

Al margen del sorteo, la política exterior de Estados Unidos en el Caribe añade una capa preocupante. Informes sobre despliegues navales y operaciones de gran escala señalan la llegada de destructores, buques anfibios, submarinos y aviones de patrulla marítima a aguas cercanas a Venezuela, en lo que ha sido descrito como una de las mayores operaciones militares estadounidenses en la región en décadas. Estos movimientos se presentan oficialmente como parte de misiones contra el narcotráfico, pero expertos y fuentes diplomáticas indican que también buscan presionar al gobierno de Nicolás Maduro y proyectar fuerza frente a Rusia, China e Irán.

Que esto ocurra justo en la antesala del Mundial revela una doble cara: por un lado, Washington se presenta como anfitrión amable que abre sus estadios al planeta; por otro, mantiene una postura agresiva hacia gobiernos incómodos del Caribe y Sudamérica, incluida la consideración de objetivos en territorio venezolano y el despliegue de buques de guerra frente a sus costas. El mensaje que reciben millones de latinoamericanos es ambiguo: se les invita a celebrar el fútbol en territorio estadounidense,

pero al mismo tiempo se proyectan buques, aviones y sanciones sobre países de la región.

MIGRANTES, ICE Y EL ABSURDO DE UN MUNDIAL BAJO REDADAS

La política migratoria de Trump agrava estas contradicciones. Organizaciones de derechos humanos y medios han documentado decenas de miles de arrestos de migrantes por parte de ICE en ciudades que serán sedes de partidos mundialistas, y alertan que el ritmo de las detenciones podría mantenerse o incluso acelerarse durante el torneo. Preguntado directamente si se descarta el despliegue de operativos de ICE durante el Mundial o incluso contra aficionados extranjeros, el representante de la Casa Blanca para el grupo de trabajo de la FIFA, Andrew Giuliani, se negó a cerrar esa puerta y afirmó que el presidente “no descarta ninguna medida” que según él, garantice la protección a la población estadounidense. Ese tipo de despliegue no distingue pasaportes ni acentos: bastan la apariencia, el color de piel o estar en el lugar y la hora equivocada para terminar en una revisión exhaustiva, una detención temporal o, en el peor de



los casos, en un centro de retención migratoria. El riesgo no es menor: turistas que extravíen un documento, estudiantes que viajen con papeles en trámite o aficionados que se desplacen en zonas

con operativos podrían verse atrapados en la maquinaria del control migratorio justo en medio de lo que se vende como “la mayor fiesta del fútbol”.



Más aún, la amenaza de revisar teléfonos celulares en puntos de ingreso al país agrega un componente invasivo. Organizaciones de derechos civiles recuerdan que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sostiene que puede revisar dispositivos electrónicos de cualquier persona que intente entrar a Estados Unidos, sin necesidad de orden judicial ni sospecha razonable, e incluso retenerlos si no se entrega la clave de acceso. La imagen que queda es la de un anfitrión que invita al mundo a una fiesta masiva mientras barre sus calles con redadas, registra dispositivos personales y manda el mensaje de que cualquiera puede ser tratado como sospechoso.

FIFA, neutralidad de papel

La crisis con Irán, el endurecimiento de las políticas de visas y el clima de persecución migratoria en Estados Unidos vuelven a colocar a la FIFA en el banquillo. Infantino insiste en que el fútbol debe “unir”, pero la organización tolera que un país sede aplique criterios políticos en el otorgamiento de visas a dirigentes y jugadores, al tiempo que fabrica un premio de “paz” para el líder que impulsa esas mismas políticas agresivas.

La comparación con “Su Excelencia” no es casual: Infantino actúa como el personaje que decide apabullar con honores a quien sabe vanidoso, con tal de mantenerse en gracia con el poder. En ese juego, la FIFA sacrifica cualquier apariencia de neutralidad y convierte el Mundial en un escaparate más de las ambiciones personales de Trump, en lugar de defender de manera firme a selecciones, aficionados y trabajadores migrantes.

TRUMP, SHEINBAUM Y CARNEY, TRES PAÍSES, TRES MANERAS DE VER EL MUNDIAL

El sorteo del Mundial dejó en claro que el fútbol es hoy un espacio donde se cruzan ambiciones presidenciales, proyectos de país y agendas de seguridad. Trump intenta apropiarse del torneo para reforzar su imagen interna y exhibir músculo militar y migratorio, incluso a costa de exponer a aficionados y selecciones. Sheinbaum busca usar el evento para mostrar a México como anfitrión responsable, apostar por el desarrollo regional y construir una relación con Estados Unidos basada en cooperación, no subordinación. Carney, por su parte, se mueve en un registro más sobrio, intentando que Canadá se confirme como socio fiable y moderado.

Mientras se habla de fiesta global, hay boicots por visas, amenazas sobre jugadores con pasado militar, operaciones en el Caribe para intimidar a Venezuela y la posibilidad absurda de un Mundial atravesado por redadas del ICE y revisiones de celulares en aeropuertos. El balón rodará en 2026, pero lo hará sobre un terreno donde las decisiones de Washington, la docilidad de la FIFA y la capacidad de líderes como Sheinbaum y Carney para contener excesos definirán si la Copa del Mundo será recordada como una celebración compartida o como un gigantesco espectáculo rodeado de arrogancia, miedo y vigilancia.



ASIA CENTRAL Y EL CÁUCASO:

EL GRAN JUEGO REAPARECE EN EL TABLERO GEOPOLÍTICO GLOBAL

E E. UU. reactiva el Gran Juego en Asia Central, reordenando la disputa con Rusia y China por el control de Eurasia.

El retorno de Estados Unidos a Asia Central vuelve a situar a la región en el centro de la competencia estratégica entre grandes potencias. Lejos de inaugurar un escenario verdaderamente multipolar, este movimiento confirma la persistencia de una arquitectura geopolítica formulada hace más de un siglo. Dos análisis recientes —El Oleoducto Transcaspio resurge mientras Estados Unidos planea su regreso a Asia Central, de Conor Gallagher, publicado en *Naked Capitalism*, y La carrera de Donald Trump por Asia Central, de John Herbst, en *The National Interest*— muestran que el llamado Gran Juego nunca desapareció: simplemente adoptó nuevas formas, actores y mecanismos.

EL OLEODUCTO TRANSCASPIO COMO HERRAMIENTA GEOESTRATÉGICA

Gallagher analiza con detalle el resurgimiento del proyecto del Oleoducto Transcaspio (TCP), una iniciativa que durante años pareció inviable debido a su complejidad técnica, la falta de consenso financiero y la oposición directa de Rusia e Irán. El renovado impulso estadounidense no responde a una necesidad energética inmediata, sino a una lógica claramente geoestratégica. Cada volumen de gas procedente de Turkmenistán que llegue a Europa sin atravesar territorio ruso debilita la capacidad de Moscú para influir sobre el mercado energético europeo. El mar Caspio, que parecía haber perdido relevancia frente al auge del gas natural licuado y la expansión energética de Medio Oriente, vuelve así a ocupar un lugar central en la competencia global.

IMPACTO REGIONAL: EUROPA, ASIA CENTRAL Y EL CÁUCASO



AMOS OLVERA PALOMINO
AMOSOP@HOTMAIL.COM
@PALOMINOAMOS

Washington concibe el TCP como un instrumento capaz de reconfigurar no solo el mapa energético, sino también el equilibrio político regional. La Unión Europea observa el proyecto con interés, aunque con cautela: necesita diversificar sus fuentes de suministro, pero teme la reacción rusa y el costo político de aumentar la tensión en un espacio históricamente vinculado a Moscú. Turkmenistán evalúa la posibilidad de diversificar sus exportaciones, consciente de que reducir su dependencia de China también implica exponerse a nuevas presiones externas. Azerbaiyán, convertido en puente energético entre el Caspio y el Mediterráneo, se consolida como pivote regional, aunque asumiendo mayores riesgos. Las implicancias de este corredor van más allá del gas: afectan directamente la influencia rusa, la expansión china y la presencia turca.



LA ESTRATEGIA ESTADOUNIDENSE TRAS AFGANISTÁN

Desde otro ángulo, Herbst sostiene que el regreso de Estados Unidos a Asia Central responde, ante todo, a la necesidad de recuperar un espacio que Washington descuidó tras la retirada de Afganistán. No se busca —advierte— un retorno militar masivo ni un nuevo proyecto de “nation building”. La estrategia de la administración Trump apunta a alianzas selectivas que permitan frenar la influencia china en infraestructura, crédito y comercio; equilibrar la presencia rusa en materia de seguridad, migración y militarización; y proyectar la idea de que Estados Unidos sigue siendo un actor indispensable en el corazón de Eurasia. Sin embargo, se trata de un regreso tardío y con recursos más limitados que en el pasado.

ESTADOS CENTROASIÁTICOS ENTRE TRES POTENCIAS

Los cinco estados centroasiáticos se encuentran atrapados entre tres grandes polos de poder —Rusia, China y Estados Unidos—, una posición que les permite maniobrar tácticamente, aunque con márgenes estrechos. Washington

ofrece diversificación económica y cooperación en seguridad, pero no puede igualar ni el peso histórico de Rusia en la región ni la capacidad financiera de China. El equilibrio es frágil: Estados Unidos necesita demostrar que su retorno no es meramente simbólico, mientras Moscú y Pekín observan cada movimiento con atención.



MACKINDER, EL HEARTLAND Y LA VIGENCIA DEL PENSAMIENTO CLÁSICO

La vigencia del pensamiento de Halford J. Mackinder reaparece aquí con claridad. En *The Geographical Pivot of History* (1904), formuló la máxima que marcó un siglo de geopolítica: “Quien gobierne el Este de Europa dominará el Heartland; quien gobierne el Heartland dominará la Isla-Mundo; quien gobierne la Isla-Mundo dominará el mundo.” Para Mackinder, el espacio que se extiende desde el Volga hasta el Himalaya y desde el Caspio hasta Siberia constituía el núcleo del poder terrestre. Karl Haushofer reforzó posteriormente esta idea, y Zbigniew

Brzezinski, en *El gran tablero mundial*, subrayó que Asia Central y el Cáucaso son el punto donde convergen —y chocan— los intereses de las grandes potencias.

RUSIA, CONTINUIDAD HISTÓRICA Y EQUILIBRIO DE PODER

En este marco, la narrativa sobre un supuesto “declive ruso” resulta poco convincente. La disolución de la URSS no implicó el colapso de Rusia, sino el fin de un imperio multinacional que Moscú sostenía económicamente. Liberada de esa carga, Rusia pudo concentrar recursos en su propio territorio y recuperar en pocas décadas su economía, su influencia regional y su proyección militar. Esta continuidad histórica explica por qué Eurasia sigue siendo percibida por Moscú como su espacio natural de seguridad.

EL GRAN JUEGO QUE NUNCA TERMINÓ

Estados Unidos regresa así a un tablero donde Rusia está reafirmada, China consolidada y Turquía busca ampliar su presencia. El Gran Juego está de vuelta porque nunca se fue. Asia Central y el Cáucaso recuerdan que el futuro del orden global también se decide en las estepas y corredores montañosos de Eurasia, allí donde, como advertía Mackinder, late el corazón del mundo.



EL FRACASO DE LOS PROFETAS

DEL DESASTRE Y EL FIN DEL CHANTAJE MUTUO

Hoy el mundo ha cambiado, y en ese giro, México ha encontrado una brújula propia que la vieja guardia mediática se niega a reconocer.

LOS SOLDADOS DE LA OPINIÓN

Oposición, medios y opinadores han construido de México un relato de caos cinematográfico. Desde hace siete años, el guion de los medios empresariales ha sido el mismo: según ellos la catástrofe es inminente. Hemos visto desfilas a analistas y opinadores que, con una seguridad pasmosa, auguraban un dólar a 30 pesos y una fuga masiva de capitales que dejaría al país en la ruina. Veían un desastre en cada decisión de política pública que priorizara el bienestar social sobre el privilegio corporativo. Auguraban que México sería como Venezuela y nada ha resultado cierto. Hoy, la realidad les propina un golpe seco. El peso mexicano se mantiene firme, rondando los 18 pesos, y la inversión extranjera, lejos de huir, ha alcanzado niveles históricos gracias a la relocalización de empresas y la estabilidad macroeconómica. La profecía del desastre resultó ser, en realidad, un deseo mal disfrazado de análisis técnico dejando a los analistas agoreros de la ruina en ridículo.

El comportamiento de ciertos medios no es azaroso; responde a intereses que poco tienen que ver con el derecho a la información. La batalla que libra actualmente TV Azteca es el ejemplo más puro de esta editorialización adversa. No se trata de una crítica periodística legítima, sino de una resistencia simbólica y material de las élites que se sienten desplazadas del centro del poder político.

Para estos grupos, la Cuarta Transformación no es un proceso democrático, sino un obstáculo para sus negocios. Por ello, utilizan sus pantallas no para informar sobre el contexto global, sino para intentar crear una percepción de inestabilidad que justifique su retórica de odio. El

mundo giró y la vieja prensa se quedó mareada, aferrada a un pasado donde sus palabras podían tumbar gobiernos o devaluar monedas.

Sin embargo, la crítica legítima a la editorialización adversa de los grandes consorcios no debe ser un chantaje para la inversión en pauta del Estado.

La respuesta ante la distorsión informativa tampoco puede ser el aislamiento o la réplica de los mismos vicios desde los medios públicos del SPR. Si bien el modelo de comunicación ha cambiado, la objetividad en los medios públicos debe seguir siendo la brújula que los distinga de los intereses privados. El recurso utilizado es, ante todo, dinero del pueblo, y su fin último es garantizar el derecho a la información de todos, sin distinción de simpatías partidistas.

En este sentido, el gobierno no debe, ni puede, seleccionar medios de comunicación basándose en afinidades ideológicas para invertir en campañas informativas. La libertad de expresión se marchita cuando se condiciona la pauta publicitaria. El viejo axioma echeverrista que derivó en el golpe a Excelsior en los años 70 no puede tener cabida en la Cuarta Transformación: el “me pegas, no te compro” o “eres adverso, no te invierto” debe quedar enterrado como un vestigio del autoritarismo del siglo pasado.

EL FIN DE LA DICTADURA DEL RATING

Un dato duro pone en perspectiva esta transición: mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron cerca de 60,000 millones de pesos en publicidad oficial para aceptar la maquinaria de opinión, la



EDGAR FERNANDO CRUZ

@EDGARFERNANDOCRUIZ

COMUNICACIONLOGICA64@GMAIL.COM

administración actual ha reducido ese gasto en más de un 70%, reorientando esos recursos a programas sociales. Pero el reto no es solo gastar menos, sino gastar mejor.

La política de comunicación no puede guiarse exclusivamente por el rating. El Estado tiene la obligación de llegar al 100% de la población. Detrás de los medios pequeños, de las radios comunitarias y de los comunicadores independientes en las regiones más apartadas, hay un público que merece ser informado sobre sus derechos y las acciones de gobierno. Ignorar a los medios pequeños solo por no tener los números de las grandes televisoras es una forma de exclusión informativa.

Estamos asistiendo a un necesario acomodo de fuerzas. La era del chantaje mutuo —donde el medio extorsionaba con el escándalo y el gobierno con el presupuesto— debe dar paso a una madurez democrática. Ni los medios deben ser oficinas de propaganda, ni el gobierno debe usar el erario para domesticar líneas editoriales.

La batalla simbólica que hoy vemos es el síntoma de una transición dolorosa pero necesaria. Al final, el objetivo es un ecosistema de medios abiertos, plurales y libres de campañas de lodo, frente a un gobierno que comunica a todo su público sin usar la chequera como bozal. Solo así, el ciudadano ya no es un espectador pasivo; es un juez informado que sabe distinguir entre el periodismo de Estado y la defensa de los privilegios.

EL GIRO POLÍTICO EN CHILE



Al iniciar el año 2026, el continente americano se encuentra inmerso en una transformación geopolítica de una magnitud y profundidad no vistas desde el fin de la Guerra Fría, un reordenamiento que ha fracturado el tablero diplomático y ha puesto a prueba la supervivencia de los proyectos progresistas en la región. Si alguna vez existió la ilusión, alimentada durante la primera mitad de la década, de que América Latina caminaba hacia una consolidación homogénea de gobiernos de izquierda y centroizquierda, el amanecer del nuevo año se ha encargado de disipar con la brutalidad incontestable de los hechos consumados. La victoria aplastante de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile no es meramente una alternancia democrática más en la siempre vibrante política del Cono Sur; simboliza el colapso definitivo de un ciclo histórico y la confirmación de que la región se ha partido en dos bloques irreconciliables, dejando a México y a su proyecto de transformación en una nueva posición estratégica alarmante. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las noticias que llegan desde Santiago no pueden ser leídas como simples reportes internacionales ajenos, sino como advertencias existenciales sobre los límites del discurso ideológico frente a la demanda de resultados tangibles.

Con un Donald Trump desatado en el Norte, imponiendo una política exterior agresiva de “Estados Unidos Primero”, y una “Marea Azul” consolidada en el Sur bajo el liderazgo de figuras como Kast y Javier Milei, nuestro país ha quedado convertido en una trinchera estratégica, defendiendo una visión de soberanía, justicia social y humanismo en un continente que parece haber claudicado ante la fuerza bruta, el intervencionismo militar directo y el mercado desregulado.

IMPLOSIÓN DEL PROYECTO PROGRESISTA DE BORIC

Para comprender la magnitud del sismo político que sacude al hemisferio, es imperativo diseccionar primero la implosión del modelo chileno, pues allí radica la lección más dolorosa para el progresismo continental. La República de Chile ya no es la “tumba del neoliberalismo” que prometía ser durante el estallido social de 2019, ni el faro de la socialdemocracia moderna que muchos esperaban. Es, por el contrario, el nuevo laboratorio de una derecha radical de “mano dura” que ha sabido leer con precisión quirúrgica lo que la administración saliente de Gabriel Boric ignoró o no pudo resolver: el miedo profundo de la ciudadanía.



América Latina se **fractura entre derecha dura e intervencionismo;** México, trinchera del progresismo en disputa.





La victoria de Kast en la segunda vuelta del pasado 14 de diciembre de 2025 fue inapelable, obteniendo un contundente 58.17% de los votos frente al 41.83% de la candidata oficialista, Jeannette Jara. Este resultado, que otorgó a Kast la mayor votación histórica en términos absolutos para un presidente en Chile, no debe leerse bajo una óptica simplista o reconfortante de “fascismo contra democracia”, como intentó plantear la campaña oficialista. Fue, en esencia, un voto de castigo a la ineficacia de gestión y un grito desesperado en busca de orden. El electorado chileno no giró a la derecha por una súbita conversión filosófica al

conservadurismo, sino por fatiga vital tras años de incertidumbre, procesos constituyentes fallidos y una crisis de seguridad que alteró la vida cotidiana. La administración de Gabriel Boric, que concluye su mandato en marzo de 2026, colapsó bajo el peso de sus propias promesas incumplidas y una realidad criminal que mutó cualitativamente, desbordando la capacidad de respuesta del Estado. Si bien las estadísticas oficiales intentaban mostrar una estabilización en las tasas de homicidios hacia 2025, la naturaleza del crimen sufrió una transformación que aterrorizó a la clase media y baja.

Resultados Definitivos

Primera Vuelta Presidencial 2025

Candidato	Partido / Coalición	% Votos	Votos Totales	Perfil Ideológico
	Jeannette Jara PCCh / Unidad por Chile	26.85%	~3.5 M	• Izquierda / Comunista
	José Antonio Kast P. Republicano / Cambio por Chile	23.92%	~3.1 M	• Derecha Conservadora
	Franco Parisi Partido de la Gente	19.71%	~2.6 M	• Derecha Conservadora
	Johannes Kaiser P. Nacional Libertario	13.94%	~1.8 M	• Populismo / Anti-élite
	Evelyn Matthei UDI / Chile Varnos	12.46%	~1.6 M	• Extrema Derecha / Libertario

Fuente: Servicio Electoral (Servel)

Resultados Definitivos

Segunda Vuelta Presidencial 2025

Candidato	Coalición	% Votos	Votos Totales	Diferencia
	José Antonio Kast Frente Social Cristiano / Republicanos	58.17%	7,263,236	▲16.34%
	Jeannette Jara Unidad por Chile	41.83%	5,222,558	

Fuente: Servicio Electoral (Servel)

INSEGURIDAD, EL TALÓN DE AQUILES DEL NUEVO CHILE

La irrupción de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua introdujo en el paisaje urbano chileno prácticas de violencia extrema, como secuestros extorsivos, sicariato y la aparición de cuerpos desmembrados, fenómenos ajenos a la historia criminal reciente del país andino. Mientras la izquierda gobernante se debatía en discusiones semánticas y sociológicas sobre los orígenes estructurales del delito, Kast ofreció una solución draconiana pero perfectamente inteligible para el ciudadano de a pie: el “Plan Implacable”. Inspirado explícitamente en el modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador, este plan promete la construcción acelerada de 100,000 nuevas plazas penitenciarias, incluyendo cárceles de máxima seguridad para el aislamiento total de líderes criminales, y el mantenimiento de un estado de excepción permanente en la Macrozona Sur y en áreas urbanas críticas. Para un electorado fatigado, que valoraba la eficacia punitiva por encima de las garantías procesales, la promesa de orden valía más que cualquier reforma social estructural.

A la crisis de seguridad se sumó un estancamiento económico que terminó por erosionar la base de apoyo del progresismo. Chile experimentó lo que los economistas ya denominan un “decenio perdido” en términos de crecimiento per cápita, con un Banco Central ajustando las proyecciones de crecimiento tendencial a un exiguo 1.8% para el periodo 2025-2034. Con un desempleo estancado en torno al 9% y una inflación que, aunque controlada, había mermado el poder adquisitivo de los salarios reales, la promesa de un “Estado de Bienestar” se volvió insostenible sin una base material robusta que la financiara.

La administración Boric terminó administrando el modelo neoliberal que juró reemplazar, pero sin la eficiencia tecnocrática que caracterizó a los gobiernos de la Concertación, pavimentando así el camino para que la oferta de “orden y crecimiento” de Kast resonara con fuerza en la clase trabajadora.

El presidente electo ha delineado un programa de “emergencia nacional” que busca romper con el gradualismo mediante un shock liberal agresivo, proponiendo un recorte de 6,000 millones de dólares en el gasto público durante sus primeros 18 meses para “cortar la grasa del Estado” y una reducción inmediata del impuesto corporativo para reactivar la inversión. La reacción de los mercados financieros ante esta propuesta fue eufórica: el lunes posterior a la elección, la Bolsa de Santiago se disparó y el peso chileno se apreció, interpretando el triunfo de Kast como el fin de la incertidumbre regulatoria y el cierre definitivo de la inestabilidad constitucional.

EL COROLARIO TRUMP Y LA RUPTURA DEL ORDEN HEMISFÉRICO

Sin embargo, si el triunfo de Kast reordenó el escenario político del Cono Sur, la intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela, ocurrida apenas iniciaba el año, dinamitó las reglas de convivencia hemisférica y redefinió el papel de la soberanía nacional en la región. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo una versión recargada y agresiva de la Doctrina Monroe, bautizada por analistas como el “Corolario Trump”, que establece el derecho unilateral de Washington a intervenir para asegurar el control del hemisferio. La operación “Absolute Resolve”, ejecutada en la madrugada del 3 de enero de 2026, no fue solo un golpe de mano quirúrgico para capturar a Nicolás Maduro; fue un mensaje de fuerza bruta enviado a toda la región. El despliegue de más de 150 aeronaves, incluyendo bombardeos estratégicos con B-1B Lancer y el uso de tecnología de guerra electrónica para cegar las defensas aéreas venezolanas, culminó con la extracción del mandatario hacia Nueva York y dejó un saldo de aproximadamente 75 muertos en tierra al cierre de edición. Trump declaró cínicamente que Estados Unidos “administraría” Venezuela temporalmente, rompiendo todos los tabúes de no intervención que habían regido la diplomacia interamericana durante décadas.



Este evento actuó como un catalizador que dividió aguas definitivamente en América Latina, destruyendo la capacidad de consenso de organismos regionales como la CELAC y evidenciando la fractura ideológica del continente. La reacción ante la intervención delineó con claridad los dos bloques que hoy se disputan la hegemonía regional. Por un lado, se consolidó el “Eje de la Celebración”, liderado por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto con Javier Milei de Argentina y Daniel Noboa de Ecuador. Lejos de condenar la violación de la soberanía venezolana, Kast calificó la captura de Maduro como “una gran noticia para la región” y ofreció el respaldo político de su futuro gobierno a las acciones de Washington, alineando a Santiago

como un satélite activo de la política exterior estadounidense.

Por otro lado, se conformó un bloque de resistencia institucional encabezado por los gobiernos de Brasil, Colombia y México, quienes condenaron enérgicamente la acción. El presidente Lula da Silva calificó la operación como una “afrenta gravísima” que cruzaba una línea inaceptable, mientras que el gobierno de México citó la Carta de las Naciones Unidas exigiendo el respeto irrestricto a la integridad territorial de los Estados. No obstante, la realidad diplomática es cruel: la reunión de emergencia de la CELAC convocada para el 5 de enero terminó no de la mejor forma, incapaz de emitir una declaración conjunta debido a la oposición del bloque conservador.



MÉXICO ANTE LA PRESIÓN ESTADOUNIDENSE

En este escenario de tormenta perfecta, México se encuentra en una posición difícil que pone a prueba el proyecto soberanista de la Cuarta Transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación interna robusta, superior al 75% al inicio de 2026, lo que le otorga un capital político envidiable para maniobrar, pero la presión externa es implacable y proviene de dos frentes simultáneos: el económico y el diplomático. La administración Trump no ha dudado en utilizar el comercio como un arma de guerra asimétrica para doblegar la voluntad política de sus vecinos. La imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) a principios de 2025, vinculando explícitamente el flujo comercial al control de la migración y el tráfico de fentanilo, ha provocado daños estructurales en la economía mexicana.

La incertidumbre generada por esta guerra comercial, donde las reglas del juego pueden cambiar con un tuit presidencial desde la Oficina Oval, ha actuado como un freno de mano para el tan anunciado nearshoring. Las empresas internacionales han paralizado inversiones ante el riesgo arancelario, lo que se tradujo en una contracción del 0.3% del PIB mexicano en el tercer trimestre de 2025 y proyecciones de crecimiento anémico de entre el 0.6% y el 1.0% para el cierre de 2026.





EL CONO SUR GIRA A LA DERECHA: ¿FRAGMENTACIÓN LATINOAMERICANA?

El panorama hacia el sur no ofrece mayor consuelo. La consolidación del “Cinturón Azul” en el Cono Sur, con Kast en Chile, Milei en Argentina, Peña en Paraguay, Noboa en Ecuador y un gobierno conservador en Uruguay, ha dejado a México y Brasil aislados diplomáticamente. La relación con Chile, otrora un aliado confiable bajo el mandato de Boric, se anticipa gélida y conflictiva. La retórica de Kast, alineada con la derecha radical global, choca frontalmente con los principios de la política exterior mexicana. Más grave aún es el deterioro de las relaciones entre los propios países sudamericanos, como lo demuestra el conflicto entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el mandatario electo chileno.

Lo que ocurre en Chile demuestra que cuando el Estado falla en sus funciones básicas de proveer seguridad física y certeza económica, el electorado, fatigado y pragmático, buscará orden y autoridad, aunque estos vengan envueltos en un paquete de autoritarismo y recorte de libertades. La “fatiga constitucional” y social en Chile enseña que los procesos de cambio no pueden ser eternos ni exclusivamente retóricos; la paciencia social es un recurso finito que se agota rápidamente ante la falta de resultados.

MÉXICO, LA TRINCHERA DEL PROGRESISMO LATINOAMERICANO

Para el “Humanismo Mexicano”, la lección es clara: aunque el gobierno de la Cuarta Transformación cuenta con la ventaja de haber

entregado resultados materiales tangibles en términos de reducción de pobreza y mejoras salariales, el estancamiento económico proyectado para 2025 y 2026 debe poner al gobierno a blindar posibles debilidades en el esquema de gobernanza para no ser arrastrado por la marea.

Si la percepción de inseguridad se combina con una crisis económica inducida desde el exterior, el caldo de cultivo para un viraje autoritario o una reacción conservadora estará servido. La integración latinoamericana, ese viejo sueño de la Patria Grande, ha entrado en una pausa indefinida, quizás terminal en su formato actual. Con una región fracturada entre una derecha pro-estadounidense exultante y una izquierda asediada y a la defensiva, México debe priorizar su supervivencia interna y recalibrar sus alianzas estratégicas con una dosis masiva de realismo. La presidenta Sheinbaum enfrenta el reto colosal de construir un dique de contención lo suficientemente fuerte para que la ola conservadora del sur y la presión imperial del norte no dismantelen el proyecto de transformación en casa.

Chile ha girado el timón hacia un experimento de autoritarismo de mercado, validando la fuerza como método político. México resiste, pero las nubes en el horizonte son oscuras y la responsabilidad como líder estratégico de Latinoamérica es una carga pesada. En este 2026, la hegemonía está en disputa, y México parece ser la última trinchera de una batalla que el resto del continente ya ha comenzado a perder.

EL NUEVO TABLERO POLÍTICO URBANO DE ESTADOS UNIDOS

Las nuevas alcaldías en EE.UU. redefinen agendas urbanas y tensiones con Washington, con efectos directos para México en migración, comercio y diplomacia local.



Las elecciones locales de 2025 en Estados Unidos reconfiguraron el mapa político de las grandes ciudades y exhibieron una tendencia que ya parecía inevitable; el poder urbano se consolida como contrapeso de la Casa Blanca en temas de migración, seguridad, clima y desarrollo económico. Aunque no todas las urbes más influyentes celebraron comicios este año, el clima político generado por los resultados —y los perfiles emergentes— repercute directamente en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Houston, cuatro nodos que definen buena parte de la relación bilateral con México.

Los comicios confirmaron un patrón; las grandes ciudades siguen bajo control demócrata o progresista, mientras que los republicanos dominan estados y suburbios. Esa fractura —urbano

vs. rural— alimenta visiones de país radicalmente distintas. Para México, este cambio no es abstracto, afecta la protección de migrantes, la gestión de comercio y transporte, el acceso consular, la cultura y la cooperación en materia energética y climática.

En este contexto, los alcaldes y alcaldesas se han convertido en actores geopolíticos. Desde Los Ángeles hasta Chicago, pasando por Nueva York y Houston, los gobiernos locales desarrollan políticas que tienen alcance internacional aun cuando sus atribuciones sean estrictamente municipales. La resistencia a redadas migratorias, la transición energética urbana, la lucha contra la desigualdad y el rediseño del transporte masivo son hoy debates que influyen en cadenas logísticas, inversiones, industrias culturales y flujos poblacionales donde México

participa de manera directa.

Los resultados de 2025 abrieron la puerta a figuras más diversas, como afroamericanos, latinos, líderes progresistas, y —en el caso de Nueva York— el primer alcalde musulmán de la ciudad. La pluralidad de estas administraciones no solo refleja transformaciones demográficas profundas, sino también la reconfiguración de prioridades, con ciudades que se saben más conectadas con el mundo que con sus propios estados. Para México, entender a estas autoridades no es opcional; es estratégico. Las decisiones tomadas en estas cuatro urbes pueden acelerar oportunidades o tensar relaciones. Estas páginas radiografían a quiénes gobiernan las ciudades más influyentes de Estados Unidos, así como el impacto de sus agendas en la región.



KAREN BASS



BRANDON JOHNSON

LOS ÁNGELES Y CHICAGO

PROGRESISMO URBANO FRENTE A CRISIS SOCIAL Y MIGRATORIA

Bass y Johnson encabezan agendas progresistas marcadas por vivienda, seguridad y presión migratoria.

En Los Ángeles, Karen Bass gobierna con una urgencia que atraviesa toda la vida pública, la crisis de personas sin hogar. Su administración declaró un estado de emergencia que le otorga margen para acelerar la construcción de vivienda y mover recursos de manera inmediata, lo que envía a la nación el inequívoco mensaje de que la desigualdad ya no puede verse como un problema marginal, sino como un desafío que condiciona la seguridad, la convivencia y el futuro de la ciudad.

Bass encarna un tipo de liderazgo que hunde sus raíces en el activismo social, la defensa de los derechos civiles y una visión progresista que busca dignidad para quienes han sido invisibilizados. Para México, este liderazgo tiene un peso especial porque casi la mitad de la población angelina es latina y la comunidad mexicana se sostiene en políticas locales que aseguren educación accesible, atención médica asequible, oportunidades laborales y resguardo frente a operativos migratorios que muchas veces se aplican sin sensibilidad alguna.

Chicago vive un ritmo distinto, pero igualmente intenso. Brandon Johnson, maestro y organizador comunitario, antes que político profesional, llegó al poder con una promesa de renovación social que incluye programas para jóvenes, un concepto de seguridad más humano y un esfuerzo sostenido para crear vivienda asequible en una ciudad marcada por contrastes profundos. Sin embargo, la llegada masiva de migrantes enviados desde otros

estados ha creado tensiones que ya no pueden ignorarse. El gobierno local destina millones de dólares a refugios temporales mientras barrios afroamericanos y latinos demandan soluciones estables que no solo administren la crisis, sino que transformen las condiciones que la producen. México observa este escenario con atención, porque Chicago es hogar de una de las diásporas mexicanas más grandes del país y cualquier cambio en su política social repercute de inmediato en la vida diaria de miles de familias. Ambas ciudades comparten una convicción progresista centrada en la justicia social, aunque se enfrentan a montañas estructurales difíciles de escalar. El costo de la vivienda se mantiene en ascenso, la desigualdad racial continúa marcando las oportunidades, las crisis de salud mental se han vuelto más frecuentes y el sistema migratorio federal deja a las ciudades cargando responsabilidades que deberían ser compartidas. Lo que sucede en Los Ángeles y Chicago se convierte en una señal adelantada de los debates que pronto dominarán la agenda nacional.

Para México, Bass y Johnson pueden convertirse en aliados indispensables en la defensa de derechos humanos, en la promoción cultural y en la cooperación consular. No pueden modificar la ley federal, pero sí pueden modelar las condiciones cotidianas bajo las cuales viven, trabajan y sueñan millones de mexicanos que forman parte del tejido social de ambas ciudades.



NUEVA YORK EN TRANSICIÓN

**La llegada
de Mamdani
anuncia
un viraje
ideológico
que redefine
migración,
vivienda
y justicia
urbana.**

Nueva York vive una de las transiciones políticas más significativas de la última década. Eric Adams, ex policía y defensor de una línea dura en seguridad, cierra su gestión marcada por investigaciones, desgaste político y tensiones con comunidades inmigrantes. Aunque su administración promovió la recuperación económica postpandemia y presumió avances en empleo y reducción de algunos delitos, también enfrentó críticas por desalojos de campamentos de personas sin hogar y por cooperar ocasionalmente con agencias federales de migración.

La elección de 2025 dio un giro inesperado: Zohran Mamdani, asambleísta y figura del ala socialista demócrata, ganó con una agenda abiertamente pro-inmigrante y de justicia social. Mamdani será el primer alcalde musulmán y el más joven desde el siglo XIX, símbolo de una ciudad cuya diversidad supera cualquier otra en Estados Unidos. Su programa propone frenar los barridos policiales a personas sin vivienda, ampliar los derechos de los migrantes, limitar la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de

**Del orden
de Adams
al giro
progresista
de Zohran
Mamdani**

Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y explorar mecanismos de justicia fiscal para financiar servicios públicos.

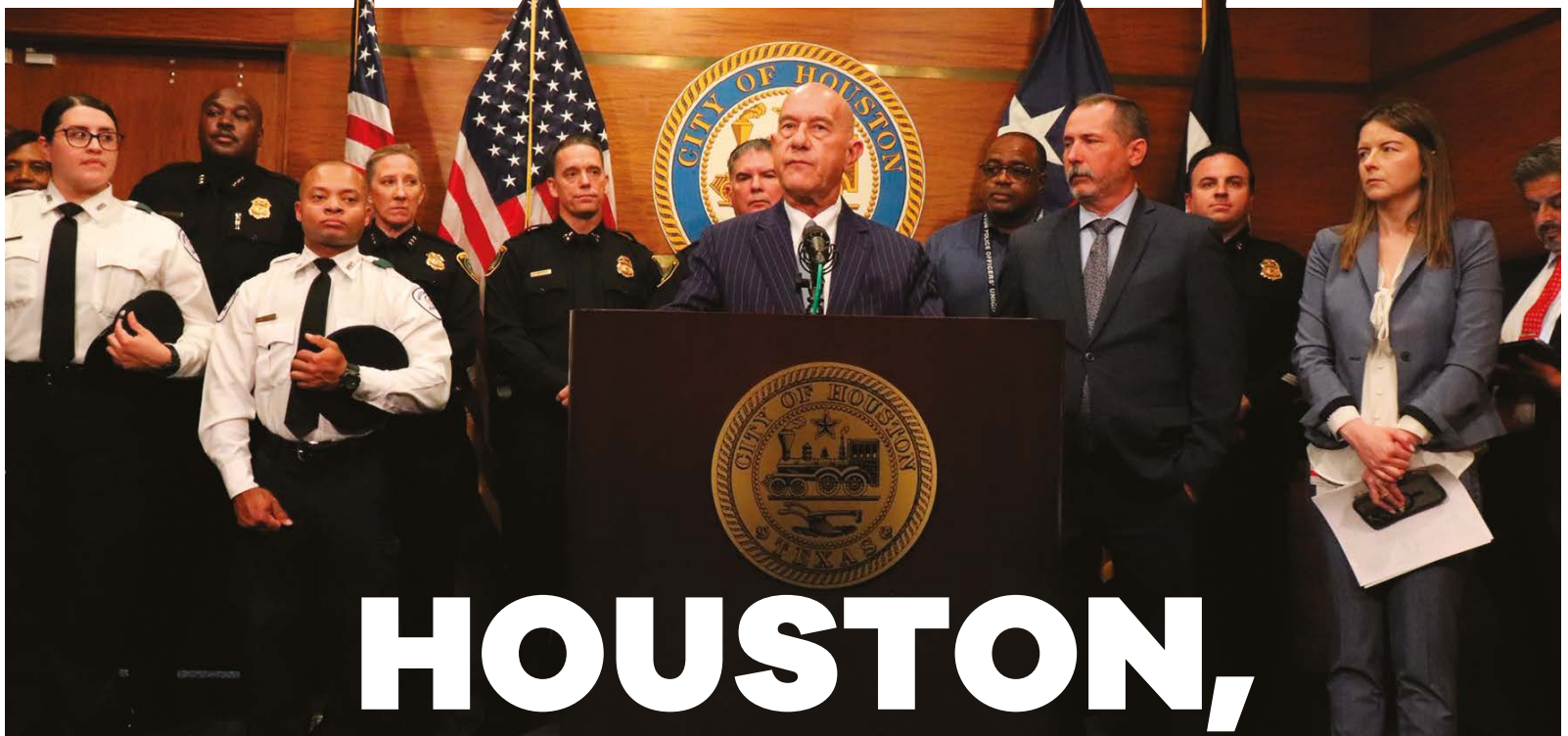
Para México, la llegada de Mamdani abre un capítulo de especial relevancia. Nueva York es uno de los centros diplomáticos, financieros y culturales más importantes para la comunidad mexicana en el exterior, y sus políticas pueden fortalecer la defensa de derechos en un momento

de endurecimiento federal. Además, la ciudad es un motor creativo global: música, gastronomía, arte y medios donde la presencia mexicana crece cada año.

Mamdani representa algo más que un relevo electoral, es un experimento ideológico que podría influir en debates nacionales.

Su postura confronta directamente la narrativa de criminalización migratoria, y coloca a Nueva York como contrapeso moral y administrativo frente a la Casa Blanca. Si su gobierno logra resultados medibles en vivienda, convivencia y protección humanitaria, podría alimentar un nuevo ciclo de políticas urbanas progresistas en todo el país.





LA CAPITAL ENERGÉTICA HISPANA

Houston es una ciudad singular dentro del ecosistema urbano estadounidense, una metrópoli que avanza sobre su propio ritmo y que combina diversidad, expansión territorial y una economía tan dinámica que influye en mercados más allá de su región. John Whitmire, veterano demócrata texano con décadas de experiencia legislativa, asumió la alcaldía con un enfoque pragmático que busca enderezar estructuras que llevaban años pidiendo atención. Su meta inicial consiste en ordenar el sistema policial, reducir rezagos de infraestructura y mejorar la seguridad en barrios donde la desigualdad se vuelve visible en basureros clandestinos, tráfico imposible, prostitución que avanza por falta de alternativas y una movilidad casi siempre insegura para quienes dependen del transporte público.

Su administración dirige recursos importantes a rehabilitar vialidades que registran accidentes recurrentes, limpiar corredores urbanos abandonados y reforzar acuerdos con cuerpos de emergencia. En esta ciudad donde casi la mitad de la población es hispana y donde la presencia mexicana forma parte del tejido cultural y laboral desde hace generaciones, cada decisión en materia de vivienda, drenaje, transporte, alumbrado o recolección de residuos tiene repercusiones directas en el día a día de trabajadores esenciales que sostienen sectores como construcción,



Whitmire gobierna la ciudad con más latinos de Texas, clave para energía y logística México-EE.UU.

servicios, hostelería y energía.

Houston se distingue también por su influencia internacional. Funciona como un corazón energético que bombea petróleo, gas y petroquímicos hacia buena parte del continente. Mantiene vínculos profundos con Pemex, con compañías mexicanas que operan en Texas y con cadenas logísticas que enlazan puertos, refinerías y centros de distribución a ambos lados de la frontera. Esta relación económica se expresa en inversiones de largo plazo, en flujos constantes de carga, en empleo especializado y en proyectos de cooperación tecnológica que buscan mejorar la eficiencia, la seguridad industrial y la transición hacia energías más limpias.

Whitmire gobierna en un estado conocido por políticas migratorias mucho más restrictivas que las de ciudades como Los Ángeles o Nueva York, lo que lo coloca en una posición intermedia. Debe equilibrar la necesidad real de

mano de obra inmigrante con un marco estatal rígido que presiona por mayor vigilancia. Para México, Houston es un socio inevitable en energía, comercio, aviación y desarrollo portuario, pero también un espacio donde la diplomacia consular despliega esfuerzos constantes para asegurar que la población mexicana acceda a servicios básicos, defensa legal y oportunidades de movilidad social en una ciudad que sigue creciendo sin detenerse.

CIUDADES ADICIONALES DE INTERÉS ESPECIAL

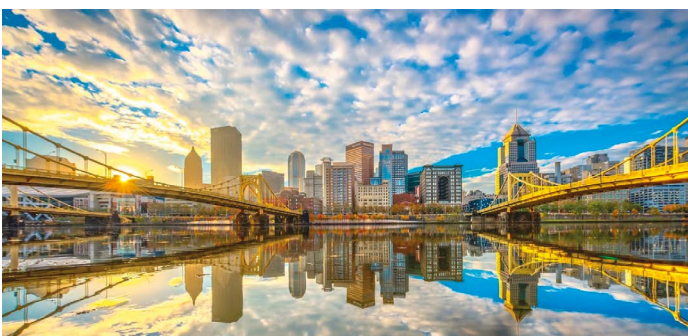
Buffalo, Jersey City y Pittsburgh renuevan liderazgos y abren nuevos espacios de vínculo para comunidades mexicanas.

Aunque la atención suele concentrarse en las megaciudades, otras urbes medianas desempeñan un papel estratégico en la nueva geografía política de Estados Unidos. Tres casos destacan por su peso demográfico, su transformación económica y su relación con comunidades inmigrantes.

Buffalo, en el norte del estado de Nueva York, eligió a Sean Ryan como su nuevo alcalde y avanza hacia un modelo urbano que combina renovación industrial, modernización del transporte y políticas de vivienda accesible. Su cercanía con la frontera canadiense la vuelve relevante en comercio y logística, mientras que su población latina ha crecido con rapidez, lo que abre espacios para la presencia cultural y laboral mexicana. Jersey City, segunda ciudad más importante de Nueva Jersey, redefinió su liderazgo con James Solomon como nuevo alcalde. Su proximidad inmediata a Nueva York, su densidad inmigrante y su papel como alternativa habitacional en la región metropolitana la convierten en un punto de referencia para dinámicas de movilidad, seguridad, vivienda y empleo en uno de los corredores urbanos más influyentes del país.

Pittsburgh, en Pensilvania, eligió a Corey O'Connor y continúa su transición de ciudad industrial a centro de innovación tecnológica, salud y educación. Aunque su comunidad latina es menor, la ciudad se ha vuelto destino de estudiantes, trabajadores especializados y migrantes que buscan costos de vida más bajos. Para México, estos cambios representan nuevas rutas de movilidad profesional, académica y cultural que vale la pena observar.

Estas ciudades no son solo notas secundarias, sino señales de los múltiples rostros del cambio urbano que atraviesa Estados Unidos.



OTRAS URBES QUE TAMBIÉN CAMBIARON ALCALDÍAS EN 2025

Además de las grandes metrópolis y de las ciudades con influencia regional clara, varias urbes medianas renovaron sus alcaldías en 2025, lo que amplía el alcance del giro político urbano. Entre ellas se encuentran Erie y Harrisburg en Pensilvania, así como localidades en estados del noreste y medio oeste que experimentan transformaciones demográficas silenciosas, con crecimiento de comunidades latinas y reorganización de sus economías locales.

Su relevancia para México no radica únicamente en su tamaño, sino en los espacios que abren para trabajadores, emprendedores y estudiantes de origen mexicano. Estas ciudades suelen tener costos de vida más bajos, programas comunitarios más accesibles y gobiernos municipales que buscan atraer inversión, turismo cultural y mano de obra calificada. Al observar sus cambios políticos, México puede anticipar nuevas rutas de asentamiento migratorio y nuevas oportunidades de cooperación consular, económica y cultural.

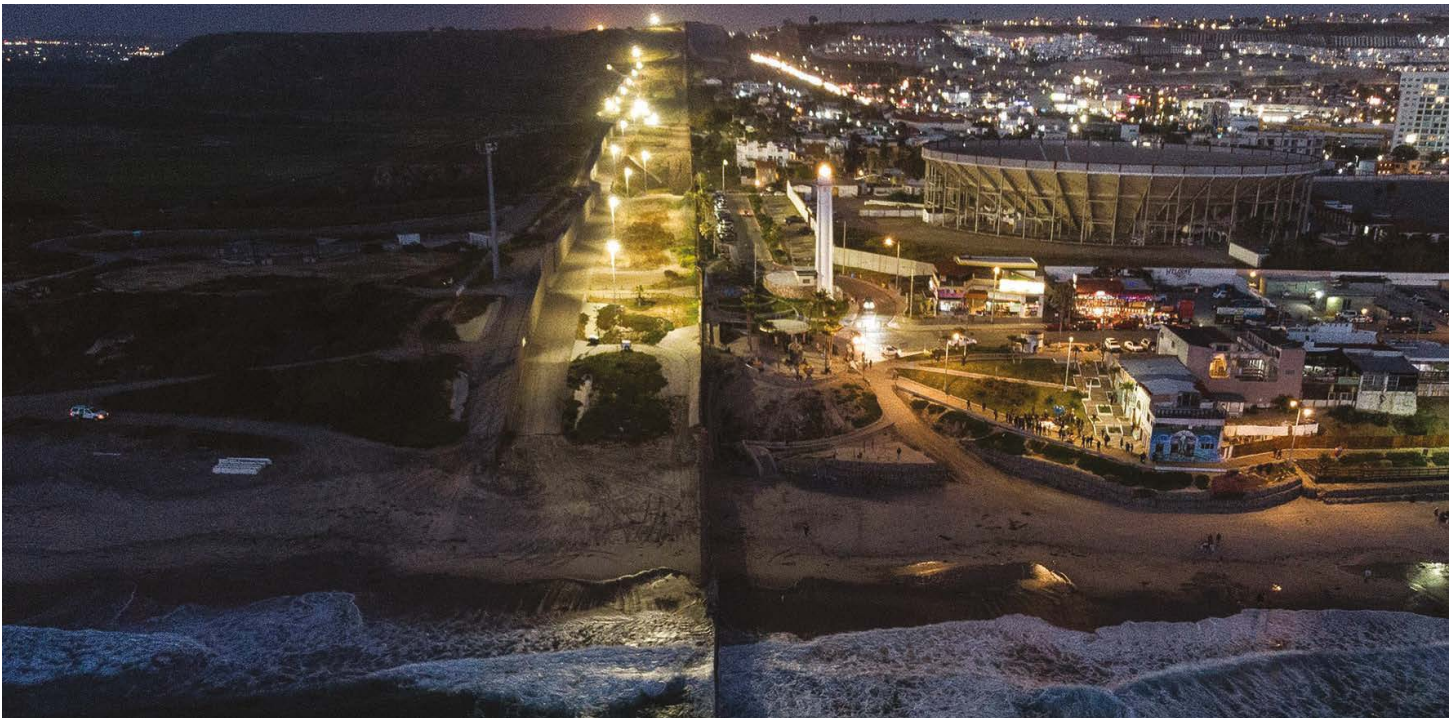


© Mike Shriver - BuffaloPhotoblog.com

IMPACTO DIRECTO EN MÉXICO

Y EN LA RELACIÓN BILATERAL

Las alcaldías redefinen migración, economía y cooperación cultural con efectos inmediatos para México.



Aunque no se ubiquen en la zona fronteriza, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Houston funcionan como verdaderas fronteras políticas para México. En ellas se define si una persona migrante vive bajo persecución o bajo políticas de integración, si logra acceder a educación, vivienda y salud sin importar su estatus, si encuentra oportunidades laborales dignas o queda relegada a la economía informal, y si su comunidad cultural florece o se diluye en la invisibilidad. Estas ciudades operan como escenarios donde se pone a prueba la voluntad inclusiva de Estados Unidos y donde el destino de miles de familias mexicanas cambia con cada decisión administrativa, por pequeña que parezca. La diplomacia mexicana ha aprendido que los gobiernos locales pueden convertirse en aliados mucho más efectivos que algunas instancias federales. Las grandes urbes mantienen consulados activos, impulsan acuerdos de hermanamiento, organizan festivales binacionales, abren espacios culturales para artistas de origen mexicano y crean programas de empleo que integran a comunidades enteras. También generan redes de protección frente a discursos hostiles y operativos

migratorios que podrían poner en riesgo a familias enteras. En un escenario de creciente endurecimiento migratorio en Washington, esta diplomacia desde abajo adquiere un valor estratégico que no puede subestimarse.

En el terreno económico, estas cuatro ciudades se comportan como nodos de cadenas globales donde México participa de manera directa. Los Ángeles sostiene uno de los sistemas portuarios más influyentes del mundo, Chicago articula agroindustria y transporte ferroviario, Houston impulsa la energía que mueve a Norteamérica, y Nueva York marca tendencias financieras que afectan inversiones en todo el continente. Las decisiones que cada administración adopta sobre infraestructura, impuestos, transición climática y movilidad cambian las reglas del juego para empresas mexicanas, exportadores,

estudiantes, científicos, creadores y profesionales que se mueven en estos ecosistemas urbanos.

En el ámbito político, las ciudades funcionan como laboratorios donde nacen ideas que luego ascienden a la discusión federal. La resistencia a redadas de ICE, las políticas de vivienda inclusiva, las nuevas normas ambientales y los enfoques de seguridad comunitaria terminan influyendo en debates nacionales que se sienten de inmediato en México. Allí se observa la dirección que podría tomar la política estadounidense en los próximos años.

El ascenso de liderazgos diversos, entre ellos mujeres, afroamericanos, latinos, progresistas y musulmanes, anuncia un cambio generacional que transforma prioridades y sensibilidades. Para México, comprender estas dinámicas no es solo una tarea analítica. Es una herramienta que permite anticipar escenarios, construir puentes duraderos y proteger a millones de personas que habitan entre dos naciones y que moldean, con su trabajo y su presencia cultural, la vida diaria de estas ciudades que ya no pueden entenderse sin su contribución.





¿Por cuánto tiempo puedo rentar un auto?

- Puedes rentar un auto desde 1 hasta 59 días consecutivos.
- Nuestra renta mensual te da la libertad de tenerlo hasta 11 meses.

Ya sea para un proyecto, un viaje largo o tu movilidad diaria, en **Hertz México** tenemos la solución que se ajusta a tus necesidades.

Hertz

México
visitmexico.com

Hertz, la arrendadora de México
hertzmexico.com

¿Tienes 6,000 Puntos Doters? Un vuelo sencillo nacional ya es tuyo

VIVA^Q Zona
1

Mérida

MID



Monterrey

MTY

Abordaje
7:15PM

Salida
7:50PM

Puerta
C3

Asiento
3C

Pasajero

Laura Pérez Escobedo



Consulta los Términos y Condiciones en
www.doters.com

doters | **VIVA**^Q